

SESIONES DE PRORROGA

1994

ORDEN DEL DIA N° 1216

COMISIONES DE LEGISLACION DEL TRABAJO,
DE FINANZAS Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Impreso el día 10 de febrero de 1995

Término del artículo 95: 21 de febrero de 1995

SUMARIO: Pequeñas y medianas empresas (PYMES).
Establecimiento de un régimen especial para las
mismas y creación de las Sociedades de Garantía
Recíproca (SGR). (86-P.E.-1994.)

- I. Dictamen de mayoría.
- II. Dictamen de minoría.

Dictamen de las comisiones *

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda han considerado el mensaje y proyecto de ley mediante el cual se establece un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Creación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR); y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

Disposiciones generales

Sección I

Objeto

Artículo 1º — La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes.

Sección II

Definición de PYMES

Art. 2º — Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las características de las empresas que serán consideradas PYMES, teniendo en cuenta las peculiaridades de los diversos sectores de la economía en que se desempeñan sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.

Sección III

Instrumentos

Art. 3º — Se facilitará el acceso de la pequeña y mediana empresa al crédito estableciéndose entre otras

* Artículo 90 del Reglamento.

facilidades, bonificaciones de la tasa de interés, ya sea mediante la creación de nuevos instrumentos o a través de la continuidad de los ya existentes.

Art. 4º — La bonificación, a la que se refiere el artículo anterior, será solventada por el Estado nacional y estará especialmente destinada a:

- a) Créditos para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa.
- b) Créditos para la constitución de capital de trabajo;
- c) Créditos para la reconversión y aumento de la productividad debiendo además contemplar amplios plazos de amortización y tasas comparables a las más bajas de plaza;
- d) Créditos para la actualización y modernización tecnológica, de procedimientos administrativos, gerenciales, organizativos y comerciales y contratación de servicios de consultoría, etcétera;
- e) Créditos para financiar las exportaciones de los bienes producidos por las PYMES.

Art. 5º — La bonificación a que se refieren los artículos 3º y 4º y el fondo a que se refiere el artículo 6º se atenderá con los créditos que anualmente se establezcan en el presupuesto general de la administración nacional.

Art. 6º — A los efectos de complementar lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de la presente ley, el Estado nacional a través de la autoridad de aplicación, creará un fondo de garantía cuyo objeto específico será facilitar el acceso al crédito a las empresas comprendidas en los programas a los que se refieren los citados artículos.

Art. 7º — El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán líneas especiales para la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

Para tal fin, recurrirán especialmente a la utilización de fondos provenientes de instituciones multilaterales de crédito o de otras fuentes de origen externo.

En ningún caso las condiciones de estos créditos podrán resultar menos ventajosas para las pequeñas y medianas empresas que las que rijan para los que con igual destino, se detallan en el artículo 4º de la presente.

Art. 8º — El Poder Ejecutivo nacional estimulará a través de los diversos medios a su alcance la constitución en el ámbito privado de sociedades conocidas como calificadoras de riesgo, especializadas en evaluar el desempeño, la solidez y el riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas con el objeto de facilitar su operatoria financiera y comercial.

Art. 9º — Con el fin de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la utilización de los múltiples recursos que ofrece el mercado de capitales, tales como la emisión de obligaciones negociables el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos pertinentes, dictará las normas que resulten necesarias

para agilizar y simplificar ese acceso y las conducentes a disminuir en todo lo posible los costos implícitos en esas operatorias.

Art. 10. — Los bancos oficiales pondrán en juego todos los mecanismos a su alcance para potenciar la capacidad del mercado de capitales de concurrir en apoyo de las pequeñas y medianas empresas con instrumentos financieros genuinos, transparentes y eficaces; entre otros, la emisión de cédulas hipotecarias.

Art. 11. — Déjase establecido que los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (CO-PYME), originados en las disposiciones de los artículos 2º de la ley 21.542 y 11 de la ley 23.020 serán destinados durante el año fiscal 1995 a atender los gastos que demanden la implementación de los nuevos instrumentos creados en virtud de la presente o la ampliación de los ya existentes.

Art. 12. — Créase un Sistema Unico Integrado de Información y Asesoramiento para las Pequeñas y Medianas Empresas. Al mismo se incorporarán todas las áreas del sector público, las que deberán aportar toda la información de que dispongan y que, a juicio de la autoridad de aplicación, resulte de interés para el accionar de las PYMES. Se invitará al sector privado a realizar al Sistema Unico Integrado los aportes de información de sus respectivas áreas que estime convenientes.

Asimismo, la autoridad de aplicación tomará los recaudos necesarios con el fin de asegurar la adecuada cobertura de todo el territorio nacional y que el asesoramiento y la información sean integrales, atendiendo a cuestiones tan diversas como las tecnológicas, las organizativas, las contables, las financieras y a todo otro aspecto esencial para aumentar la productividad de las PYMES.

Art. 13. — Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, sin perjuicio de las iniciativas que pudieran generarse como consecuencia de las disposiciones de la presente, el Estado nacional, con la concurrencia de los estados provinciales cuando así corresponda, fortalecerá y coordinará el accionar de los organismos y programas ya existentes —Centro de Información y Estadística Industrial y sus Centros de Información PYMES (SIPS); Fundaciones Exportar e Invertir; Ventanillas PYME; Programa Cambio Rural, y Sistema de Fortalecimiento de las Estructuras de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas—.

Art. 14. — Con idéntico propósito encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a movilizar, racionalizar y fortalecer tanto los cursos de acción como los recursos de los institutos Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Tecnología Industrial (INTI) y de Tecnología Minera (Intemín) y de los restantes centros e institutos de investigación y de capacitación y formación de recursos humanos bajo su dependencia, cuyas actividades guarden relación con el accionar de las PYMES.

Art. 15. — Consolidar y extender los polos productivos en el interior del país para facilitar la convergencia de esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y empre-

sas, de manera de mejorar la competitividad de las PYMES ubicadas en las economías regionales y sus posibilidades de inserción en el mercado internacional.

Art. 16. — El Estado nacional priorizará la profundización, ampliación y difusión del Programa de Desarrollo de Proveedores de manera de tender a optimizar la vinculación entre las empresas PYMES proveedoras y las grandes empresas.

Art. 17. — El Estado nacional tomará los recaudos necesarios para que el programa al que se refiere el artículo anterior incorpore, paulatinamente, a sus propios proveedores PYMES.

Art. 18. — Encomiéndose al Poder Ejecutivo nacional diseñar y poner en práctica medidas que incentiven y contribuyan a que las pequeñas y medianas empresas produzcan dentro de los más altos estándares internacionales de calidad.

Entre otras, propiciará su incorporación progresiva al Sistema Nacional de Certificación de Calidad estableciendo por la vía reglamentaria plazos adecuados pero ciertos para la incorporación de sus proveedores PYMES al mismo y su vez invitando a los Estados provinciales a adoptar medidas similares.

Art. 19. — La autoridad de aplicación promoverá la formación de consorcios de empresas PYMES con particular énfasis en aquellos vinculados con la exportación, de forma tal de orientarlos hacia el aprovechamiento de las ventajas de localización adecuada, economías de escala, masa crítica de oferta, etcétera, que caracteriza a este tipo de asociaciones.

La erogación que demande el cumplimiento del presente artículo se atenderá con los créditos que anualmente se establezcan en el Presupuesto General de la Administración Nacional.

Art. 20. — Se establecerán, a través de los organismos competentes, políticas específicas de apoyo a la internacionalización comercial de las PYMES, con particular acento en su proceso de inserción en los mercados de la región.

Art. 21. — Se diseñarán y desarrollarán instrumentos que induzcan y faciliten el proceso de especialización de las empresas pequeñas y medianas, de forma tal de incrementar su competitividad y, en consecuencia, su acceso a los mercados externos a partir del Mercosur.

Se deberán privilegiar aquellas herramientas que potencien la proyección exportadora de las PYMES, esto es el diseño, la calidad y la promoción del producto, la financiación de las exportaciones, etcétera.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el concurso de las áreas de gobierno que resulten pertinentes, desarrollará un Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las pequeñas y medianas empresas.

El mismo tendrá como principales objetivos mejorar la capacidad de gerenciamiento y el conocimiento de los mercados, inducir conductas que den adecuadas respuestas frente a la constante evolución de los mismos y estimulen un crecimiento sostenido de la productividad de las PYMES.

Con el objeto de adecuar los contenidos de la capacitación a las necesidades concretas de los empresarios PYMES, se estimulará la participación y el asesoramiento de las entidades gremiales empresarias en el citado Programa Nacional de Capacitación.

Art. 23. — El Estado nacional continuará instrumentando y desarrollando herramientas crediticias y de capacitación específicamente destinadas a las microempresas.

Art. 24. — Arbitrar los medios que promuevan la reconversión de las PYMES en consonancia con la preservación del medio ambiente y los estándares internacionales que rijan en la materia, estimulando la utilización de tecnologías limpias compatibles con un desarrollo sostenible.

Art. 25. — La autoridad de aplicación queda facultada para entender y proponer toda modificación a procedimientos administrativos previstos en cualquier norma legal, siempre que por ese medio se logren para la PYME efectivas reducciones de los tiempos y costos de gestión.

Art. 26. — Facúltase a la autoridad de aplicación para: fijar políticas y dictar normas de lealtad comercial y defensa de la competencia con aplicación específica a las relaciones de las PYMES con las grandes empresas, seas éstas sus clientes o proveedores, las que deberán prever la intervención del organismo competente en casos de atraso injustificado o descuentos indebidos en pagos, ya fuere por provisión de bienes o contratación de servicios.

Art. 27. — La autoridad de aplicación creará un Registro de Empresas PYMES por rama de actividad, el que tendrá como finalidad contar con información actualizada sobre la composición y características de los diversos sectores PYMES, que permita el diseño de políticas e instrumentos adecuados para el apoyo a estas empresas.

Art. 28. — El Poder Ejecutivo nacional elevará todos los años al Honorable Congreso de la Nación en la ley de presupuesto, una propuesta donde se prevea un porcentaje mínimo de las compras del Estado nacional, las que, siempre y cuando exista oferta adecuada, habrán de ser contratadas con pequeñas y medianas empresas.

Art. 29. — Al solo efecto de atender a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, transfírense los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME), ley 21.542 y ley 23.020, a la autoridad de aplicación de la presente ley.

Sección IV

Autoridad de aplicación

Art. 30. — El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos será la autoridad de aplicación del presente título.

Sección V

De forma

Art. 31. — Derógase la ley 23.020/82 y toda otra ley y/o norma en lo que se oponga a la presente.

TITULO II

Sociedades de Garantía Recíproca

Sección I

De las características y constitución

Art. 32. — *Caracterización.* Créanse las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con el carácter de sociedades anónimas y con el objeto de facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al crédito.

Art. 33. — *Objeto.* El objeto social principal de las Sociedades de Garantía Recíproca será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley.

Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin.

Art. 34. — *Límite operativo.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) no podrán asignar a un mismo socio partícipe garantías superiores al cinco por ciento (5 %) del total garantizado por cada SGR. Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones con el mismo acreedor más del 20 por ciento del total garantizado.

Art. 35. — *Operaciones prohibidas.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni realizar actividades distintas a las de su objeto social.

Art. 36. — *Denominación.* La denominación social deberá contener la indicación "Sociedades de Garantía Recíproca", su abreviatura o las siglas SGR.

Art. 37. — *Tipos de socios.* La Sociedad de Garantía Recíproca estará constituida por socios partícipes y socios protectores.

Serán socios partícipes únicamente las pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones generales que determine la autoridad de aplicación.

A los efectos de su constitución y durante los primeros cinco (5) años, toda SGR habrá de contar con un mínimo de doscientos (200) socios partícipes. Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a modificar estos mínimos en función de las peculiaridades regionales.

Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo. La sociedad no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores.

Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.

Art. 38. — *Derechos de los socios partícipes.* Los socios partícipes tendrán los siguientes derechos además de los que les corresponden según la ley 19.550 y sus modificaciones:

1. Recibir los servicios determinados en su objeto social cuando se cumplieren las condiciones exigidas para ello.
2. Solicitar el reembolso de las acciones en las condiciones que se establecen en el artículo 47.

Art. 39. — *Derecho de los socios protectores.* Los socios protectores tendrán los derechos que les corresponden según la ley 19.550 y sus modificaciones.

Art. 40. — *Exclusión de socios.* El socio excluido sólo podrá exigir el reembolso de las acciones conforme al procedimiento y con las limitaciones establecidas en el artículo 47.

Art. 41. — *De la constitución.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se constituirán por acto único mediante instrumento público que deberá contener, además de los requisitos exigidos por la ley 19.550 y sus modificatorias, los siguientes:

1. Clave única de identificación tributaria de los socios partícipes y protectores fundadores.
2. Delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico que sirva para la determinación de quienes pueden ser socios partícipes en la sociedad.
3. Criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partícipes y protectores y las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones.
4. Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración.
5. Condiciones y procedimientos para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes.

Art. 42. — *Autorización para su funcionamiento.* Una vez inscrita la sociedad anónima en el Registro Público de Comercio de acuerdo con la normativa vigente, la autorización para funcionar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) será otorgada por la autoridad de aplicación.

Art. 43. — *Revocación de la autorización para su funcionamiento.* La autoridad de aplicación podrá revocar la autorización para funcionar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) por sí o a sugerencia del Banco Central de la República Argentina, cuando no cumplan con los requisitos y/o las disposiciones establecidos en la presente ley.

Art. 44. — *Modificación de los estatutos.* Será nula toda modificación a los estatutos de la sociedad que no cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que el consejo de administración o los socios que realizan la propuesta, formulen un informe por escrito justificando la necesidad de modificación de los estatutos.
2. En la convocatoria a asamblea general, deberá detallarse claramente, la modificación que se propone.
3. En la misma convocatoria se hará constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio legal el texto íntegro de la reforma propuesta y su justificación, pudiendo suplirse por la entrega o envío gratuito de dichos documentos, con acuse de recibo.

4. Se requerirá la aprobación de la propuesta de modificación por parte de la autoridad de aplicación.
5. Otorgada la autorización y aprobada en asamblea general, se procederá a la inscripción del mismo.

Sección II

Del capital social, fondo de riesgo y beneficios

Art. 45. — *Capital social.* El capital social de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) estará integrado por los aportes de los socios y representado por acciones ordinarias nominativas de igual valor.

El capital social mínimo será fijado por vía reglamentaria y podrá variar, sin requerir modificación del estatuto, entre dicha cifra y un máximo que represente el quíntuplo de la misma.

La participación de los socios protectores no podrá exceder, en conjunto, del cuarenta y nueve por ciento (49 %) del capital social. La participación de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5 %) del mismo.

Art. 46. — *Fondo de riesgo.* La Sociedad de Garantía Recíproca deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio.

Dicho fondo de riesgo estará constituido por:

1. Las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la asamblea general.
2. Las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiere.
3. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumido a favor de sus socios.
4. El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos.
5. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en que fuera constituido.

Art. 47. — *Derecho al reembolso de las acciones.* Todo socio partícipe podrá exigir el reembolso de sus acciones ante el consejo de administración siempre y cuando haya cancelado totalmente los contratos de garantía recíproca que hubiera celebrado, y en tanto dicho reembolso no implique reducción del capital social mínimo y respete lo establecido en el artículo 37. Tampoco procederá cuando la Sociedad de Garantía Recíproca estuviera en trámite de fusión, escisión o disolución.

Para ello tendrá que solicitarlo con una antelación mínima de tres (3) meses salvo que los estatutos contemplen un plazo mayor que no podrá superar el de un (1) año. El monto a reembolsar, no podrá exceder del valor de las acciones integradas. No deberán computarse a los efectos de la determinación del mismo, las reservas de la sociedad sobre las que los socios no tienen derecho alguno. El socio reembolsado responderá hasta dicho monto por las deudas contraídas por la sociedad con anterioridad a la fecha en que se produjo el reintegro por

un plazo de cinco (5) años cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para afrontar las mismas.

En caso que el reembolso de capital de socios partícipes, altere la relación de participación relativa de éstos y los socios protectores, la SGR les reembolsará a estos últimos la misma proporción del retiro de capital efectuado por los socios partícipes, a efectos de mantener inalterable la relación básica del cincuenta y uno por ciento (51 %) para socios partícipes y cuarenta y nueve por ciento (49 %) para socios protectores en la composición del capital social.

Art. 48. — *Privilegios.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tendrán privilegio ante todo otro acreedor sobre las acciones de sus socios en relación a las obligaciones derivadas de los contratos de garantía recíproca vigentes. Las acciones de los socios partícipes no pueden ser objeto de gravámenes reales.

Art. 49. — *Cesión de las acciones.* Para la cesión se requerirá la autorización previa del consejo de administración y éste la concederá cuando los cesionarios acrediten reunir los requisitos establecidos en los estatutos y asuman las obligaciones que el cedente mantenga con la Sociedad de Garantía Recíproca.

Art. 50. — *Aporte de capital.* Los aportes deberán ser integrados en efectivo, como mínimo en un cincuenta por ciento (50 %) al momento de la suscripción. El remanente deberá ser integrado, también en efectivo en el plazo máximo de un (1) año a contar de esa fecha. La integración total será condición necesaria para que el socio partícipe pueda contratar garantías recíprocas.

Art. 51. — *Aumento del capital social.* El capital fijado por los estatutos podrá ser aumentado por decisión de la asamblea general ordinaria hasta el quíntuplo de dicho monto. Cuando el incremento del capital social esté originado por la capitalización de utilidades, las acciones generadas por dicho incremento se distribuirán entre los socios en proporción a sus respectivas tenencias.

En caso de tratarse de emisión de nuevas acciones, la integración de los aportes se realizará conforme a lo establecido en el artículo 50.

Todo aumento de capital que exceda el quíntuplo del fijado estatutariamente deberá contar con la aprobación de los dos tercios de los votos totales de la asamblea general extraordinaria.

Art. 52. — *Reducción del capital por pérdidas.* Los socios deberán compensar con nuevos aportes cualquier pérdida que afecte el monto del capital fijado estatutariamente o que exceda del treinta y cinco por ciento (35 %) de las ampliaciones posteriores, en las condiciones fijadas en el artículo 50.

Art. 53. — *Distribución de los beneficios.* Serán considerados beneficios a distribuir las utilidades líquidas y realizadas obtenidas por la sociedad en el desarrollo de la actividad que hace a su objeto social.

Dichos beneficios serán distribuidos de la siguiente forma:

1. A reserva legal: cinco por ciento (5 %) anual hasta completar el veinte por ciento (20 %) del capital social.

2. El resto tendrá el siguiente tratamiento:

- a) La parte correspondiente a los socios protectores podrá ser abonada en efectivo, como retribución al capital aportado;
- b) La parte correspondiente a los socios partícipes se destinará al fondo de riesgo en un cincuenta por ciento (50 %), pudiendo repartirse el resto entre la totalidad de dichos socios.

En todos los casos en que proceda la distribución de los beneficios en efectivo a que se refiere este artículo, tanto los socios protectores como los socios partícipes deberán, para tener derecho a percibirlo, haber integrado la totalidad del capital social suscrito y no encontrarse, por ningún motivo, en mora con la sociedad.

Sección III

De los órganos sociales

Art. 54. — *Organos sociales.* Los órganos sociales de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), serán la asamblea general, el consejo de administración y la sindicatura, y tendrán las atribuciones que establece la ley 19.550 para los órganos equivalentes de las sociedades anónimas, salvo en lo que resulte modificado por esta ley.

Art. 55. — *De la asamblea general ordinaria.* La asamblea general ordinaria estará integrada por todos los socios de la Sociedad de Garantía Recíproca y se reunirá por lo menos dos (2) veces al año o cuando, dentro de los términos que disponga la presente ley, sea convocada por el consejo de administración.

Serán de su competencia los siguientes asuntos:

1. Fijar la política de inversión de los fondos sociales.
2. Aprobar el costo de las garantías, el mínimo de contragarantías que la SGR habrá de requerir al socio partícipe y fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el consejo de administración.

Art. 56. — *De la asamblea general extraordinaria.* Serán de competencia de la asamblea general extraordinaria todas aquellas cuestiones previstas en la ley 19.550 y sus modificatorias y que no estuvieran reservadas a la asamblea general ordinaria.

Art. 57. — *Convocatoria de las asambleas generales.* La asamblea general ordinaria deberá ser convocada por el consejo de administración, mediante anuncio publicado durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad, con quince (15) días de anticipación, como mínimo, a la fecha fijada para su celebración. En el anuncio deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar, orden del día y recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas.

La asamblea general extraordinaria será convocada por el consejo de administración o cuando lo solicite un número de socios que representen como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital social. En la convocatoria, deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar de reunión y el orden del día en el que deberán incluirse los asuntos solicitados por los socios convocantes y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas. La convocatoria será publicada como mínimo con una antelación de treinta (30) días y durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en la que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad.

Art. 58. — *Quórum y mayoría.* Tratándose de la primera convocatoria las asambleas generales quedarán constituidas con la presencia de más del cincuenta y uno por ciento (51 %) del total de los votos de la sociedad debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un veinte por ciento (20 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad. En la segunda convocatoria, las asambleas generales serán válidas con la presencia de por lo menos treinta por ciento (30 %) de la totalidad de los votos de la sociedad, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un quince por ciento (15 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.

Para decisión por asamblea de temas que involucren la modificación de los estatutos, la elección del consejo de administración, la fusión, escisión o disolución de la sociedad, se requerirá una mayoría del sesenta por ciento (60 %) de los votos sobre la totalidad del capital social, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un treinta por ciento (30 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.

Art. 59. — *Representación en la asamblea.* Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en las asambleas generales mediante autorización por escrito para cada asamblea. Sin embargo, un mismo socio no podrá representar a más de diez (10) socios ni ostentar un número de votos superior al diez por ciento (10 %) del total.

Art. 60. — *Nulidad de voto.* Será considerado nulo aquel voto emitido por un socio cuando el asunto tratado involucre una decisión que se refiera a la posibilidad de que la sociedad pueda hacer valer un derecho en contra de él o existiera entre ambos un interés contrapuesto o en competencia. Sin embargo, su presencia será considerada para el cálculo del quórum y de la mayoría.

Art. 61. — *Consejo de administración.* El consejo de administración estará integrado por tres (3) personas, de las cuales dos (2) representarán a los socios partícipes y una (1) representará a los socios protectores y tendrá por función principal la administración y representación de la sociedad.

El consejo de administración será presidido por uno de los dos representantes de los socios partícipes.

Los miembros del consejo de administración deberán ser previamente autorizados por la autoridad de aplicación para ejercer dichas funciones.

Art. 62. — *Competencia del consejo de administración.* Será competencia del consejo de administración decidir sobre los siguientes asuntos:

1. El reembolso de las acciones existentes manteniendo los requisitos mínimos de solvencia.
2. Cuando las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se hubiesen visto obligadas a pagar en virtud de la garantía otorgada a favor de un socio por incumplimiento de éste, el consejo de administración dispondrá la exclusión del socio. También podrá proceder de la misma forma cuando no se haya realizado la integración del capital de acuerdo con lo establecido en la presente ley y los estatutos sociales.
3. Decidir sobre la admisión de nuevos socios conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, ad referendum de la asamblea ordinaria.
4. Nombrar sus gerentes.
5. Fijar las normas con las que se regulará el funcionamiento del consejo de administración y realizar todos los actos necesarios para el logro del objeto social.
6. Proponer a la asamblea general ordinaria la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.
7. Proponer a la asamblea el costo que los socios partícipes deberán ablar para acceder al otorgamiento de garantías.
8. Otorgar o denegar garantías y/o bonificaciones a los socios partícipes estableciendo en cada caso las condiciones especiales que tendrá que cumplir el socio para obtener la garantía y fijar las normas y procedimientos aplicables para las contragarantías a que se refiere el artículo 71.
9. Determinar las inversiones a realizar con el patrimonio de la sociedad en el marco de las pautas fijadas por la asamblea.
10. Autorizar las transmisiones de las acciones conforme a lo establecido en la presente ley.
11. Someter a la aprobación de la asamblea general ordinaria el balance general y estado de resultados y proponer la aplicación de los resultados del ejercicio.
12. Realizar cualesquiera otros actos y acuerdos que no estén expresamente reservados a la asamblea por las disposiciones de la presente ley o los estatutos de la sociedad.

Art. 63. — *Sindicatura.* Las Sociedades de Garantía Recíproca tendrán un órgano de fiscalización o sindicatura integrado por tres (3) síndicos designados por la asamblea general ordinaria.

Art. 64. — *Requisitos para ser síndico.* Para ser síndico se requerirá:

1. Ser abogado, licenciado en economía, licenciado en administración de empresas o contador público con título habilitante.

2. Tener domicilio especial en la misma jurisdicción de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Art. 65. — *Atribuciones y deberes.* Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 19.550 y sus modificatorias, son atribuciones y deberes de la sindicatura los siguientes:

1. Verificar en igual forma y periodicidad las inversiones los contratos de garantía celebrados y el estado del capital social, las reservas y el fondo de riesgo.
2. Atender los requerimientos y aclaraciones que formule la autoridad de aplicación y el Banco Central de la República Argentina.

Sección IV

De la fusión, escisión y disolución

Art. 66. — *Fusión y escisión.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) sólo podrán fusionarse entre sí o escindirse en dos (2) o más sociedades de la misma naturaleza, previa aprobación de la asamblea general con las mayorías previstas en el artículo 58 de la presente ley y autorización de la autoridad de aplicación, con los requisitos previstos en esta ley para su constitución.

El canje de las acciones de la sociedad o sociedades originales, por las correspondientes a la o las sociedades nuevas, se realizará sobre el valor real de las mismas. Cuando de resultas de esta forma de cálculo quedaren pendientes fracciones de acciones no susceptibles de ser canjeadas, se abonará en efectivo el valor correspondiente, salvo que existieran contratos de garantía recíproca vigentes, en cuyo caso el pago se realizará una vez extinguidos los mismos.

Art. 67. — *Disolución.* La disolución de una Sociedad de Garantía Recíproca se verificará, además de las causales fijadas por la ley 19.550 y sus modificatorias, por las siguientes:

1. Por la imposibilidad de absorber pérdidas que representen el total del fondo de riesgo, el total de la reserva legal y el cuarenta por ciento (40 %) del capital.
2. Por disminución del capital social a un monto menor al mínimo determinado por vía reglamentaria durante un período mayor a tres (3) meses.
3. Por revocación de la autorización acordada por la autoridad de aplicación.

Sección V

Del contrato, la garantía y la contragarantía

Art. 68. — *Contrato de garantía recíproca.* Habrá contrato de garantía recíproca cuando una Sociedad de Garantía Recíproca constituida de acuerdo con las disposiciones de la presente ley se obligue accesoriamente por un socio partícipe que integra la misma y el acreedor de éste acepte la obligación accesorio.

El socio partícipe queda obligado frente a la SGR por los pagos que ésta afronte en cumplimiento de la garantía.

Art. 69. — *Objeto de la obligación principal.* El contrato de garantía recíproca tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por el socio partícipe para el desarrollo de su actividad económica u objeto social.

Dicho aseguramiento puede serlo por el total de la obligación principal o por menor importe.

Art. 70. — *Carácter de la garantía.* Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán en todos los casos por una suma fija y determinada, aunque el crédito de la obligación a la que acceda fuera futuro, incierto o indeterminado. El instrumento del contrato será título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos, justificado conforme al procesamiento del artículo 793 del Código de Comercio y ha ta el importe de la garantía. La garantía recíproca es irrevocable.

Art. 71. — *De la contragarantía.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) deberán requerir contragarantías por parte de los socios partícipes en respaldo de los contratos de garantías con ellos celebrados.

El socio partícipe tomador del contrato de garantía recíproca, deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo de su operación.

Art. 72. — *Formas de contrato.* El contrato de garantía recíproca es consensual. Se celebrará por escrito, pudiendo serlo por instrumento público o privado con firmas certificadas por escribano público.

Sección VI

De los efectos del contrato entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el acreedor

Art. 73. — *Solidaridad.* La Sociedad de Garantía Recíproca responderá solidariamente por el monto de las garantías otorgadas con el deudor principal que afianza, sin derecho a los beneficios de división y exclusión de bienes.

Sección VII

De los efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y los socios

Art. 74. — *Efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el socio.* La Sociedad de Garantía Recíproca podrá trabar todo tipo de medidas cautelares contra los bienes del socio partícipe —deudor principal— en los siguientes casos:

- Quando fuese intimado al pago;
- Si vencida la deuda el deudor no la abonara;
- Si disminuyen el patrimonio del deudor, o utilizare sus bienes para afianzar nuevas obligaciones sin consentimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca;

- Si el deudor principal quisiera ausentarse del país y no dejare bienes suficientes y libres de todo gravamen para cancelar sus obligaciones;
- Quando el deudor principal incumpliere obligaciones societarias respecto de la Sociedad de Garantía Recíproca;
- Quando el deudor principal fuera una persona de existencia ideal y no diera cumplimiento a las obligaciones legales para su funcionamiento regular.

Art. 75. — *Quiebra del socio.* Si el socio quebrase antes de cancelar la deuda garantizada, la Sociedad de Garantía Recíproca tiene derecho de ser admitida previamente en el pasivo de la masa concursada.

Art. 76. — *Subrogación de derechos.* La Sociedad de Garantía Recíproca que cancela la deuda de sus socios sólo se subrogará en los derechos, acciones y privilegios del acreedor resarcido en la medida que fuera necesario para el recupero de los importes abonados.

Art. 77. — *Repetición.* Si la Sociedad de Garantía Recíproca ha afianzado una obligación solidaria de varios socios, podrá repetir de cada uno de ellos el total de lo que hubiese pagado.

Sección VIII

De la extinción del contrato de garantía recíproca

Art. 78. — *Extinción del contrato de garantía recíproca.* El contrato de garantía recíproca se extingue por:

- La extinción de la obligación principal;
- Modificación o novación de la obligación principal sin intervención y consentimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca;
- Las causas de extinción de las obligaciones en general y las obligaciones accesorias en particular.

Sección IX

Beneficios impositivos y Banco Central

Art. 79. — *Beneficios impositivos.* Los contratos de garantía recíproca instituidos bajo este régimen, gozarán de siguiente tratamiento impositivo::

- Exención en el impuesto a las ganancias, ley 20.628 —texto ordenado en 1986 y sus modificaciones— por las utilidades que generen;
- Exención en el impuesto al valor agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus modificaciones, de toda la operatoria que se desarrolle con motivo de los mismos.

Los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo de los socios protectores y partícipes, serán deducibles de las utilidades imponible para la determinación del impuesto a las ganancias, en sus respectivas actividades.

Art. 80. — *Banco Central*. En la esfera de su competencia, el Banco Central de la República Argentina dispondrá las medidas conducentes a promover la aceptación de las garantías concedidas por las sociedades de que trata el presente régimen por parte de las entidades financieras que integran el sistema institucionalizado, otorgándoles a las mismas carácter de garantías preferidas autoiquidables, en tanto reúnan los requisitos necesarios.

Asimismo el Banco Central de la República Argentina ejercerá las funciones de superintendencia en lo atinente a vinculaciones de las SGR con los bancos y demás entidades financieras.

Sección X

Autoridad de aplicación

Art. 81. — *Autoridad de aplicación*. El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación será la autoridad de aplicación del presente título de esta ley. En tal carácter, dictará las normas reglamentarias que fueran menester para su cumplimiento, y ejercerá la fiscalización y supervisión de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), con excepción de lo dispuesto en el artículo 80.

Sección XI

Disposiciones finales

Art. 82. — *Ley 19.550*. Todas aquellas cuestiones no consideradas específicamente en el título II de la presente ley se regirán por la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificaciones.

TITULO III

Relaciones de trabajo

Sección I

Definición de pequeña empresa

Art. 83. — El contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña empresa (PE) se regularán por el régimen especial de la presente ley.

A los efectos de este capítulo, pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes:

- a) Su plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores;
- b) Tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de esta ley.

Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley vinieran funcionando, el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1° de enero de 1995.

La negociación colectiva de ámbito superior al de empresa podrá modificar la condición referida al nú-

mero de trabajadores definida en el segundo párrafo punto a) de este artículo.

Las pequeñas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres (3) años, siempre y cuando no dupliquen el plantel o la facturación indicados en el párrafo segundo de este artículo.

Sección II

Registro Unico de Personal

Art. 84. — Las empresas comprendidas en la presente ley podrán sustituir los libros y registros exigidos por las normas legales y convencionales vigentes por un registro denominado "Registro Unico de Personal".

Art. 85. — En el Registro Unico de Personal se asentará la totalidad de los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación y será rubricado por la autoridad administrativa laboral competente.

Art. 86. — En el Registro Unico de Personal quedarán unificados los libros, registros, planillas y demás elementos de contralor que se señalan a continuación:

- a) El libro especial del artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, t.o. 1976);
- b) La sección especial establecida en el artículo 13 del decreto 342/92;
- c) Los libros establecidos por la ley 12.713 y su decreto reglamentario 118.755/42 de trabajadores a domicilio;
- d) El libro especial del artículo 122 del Régimen Nacional de Trabajo Agrario de la ley 22.248.

Art. 87. — En el Registro Unico de Personal se hará constar el nombre y apellido o razón social del empleador, su domicilio y número de CUIT, y además se consignarán los siguientes datos:

- a) Nombre y apellido del trabajador y su documento de identidad;
- b) Número de CUIL;
- c) Domicilio del trabajador;
- d) Estado civil e individualización de sus cargas de familia;
- e) Fecha de ingreso;
- f) Tarea a desempeñar;
- g) Modalidad de contratación;
- h) Lugar de trabajo;
- i) Forma de determinación de la remuneración asignada, monto y fecha de su pago;
- j) Régimen previsional por el que haya optado el trabajador y, en su caso, individualización de su Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP);
- k) Toda modificación que se opere respecto de los datos consignados precedentemente y, en su caso, la fecha de egreso.

La autoridad de aplicación establecerá un sistema simplificado de denuncia individualizada de personal a los organismos de seguridad social.

Sección III

Modalidades de contratación

Art. 88. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo 24.013, bajo las siguientes condiciones:

- a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo;
- b) No se requerirá el registro de contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo.
- c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

Sección IV

Disponibilidad colectiva

Art. 89. — Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria.

No podrá ser materia de disponibilidad convencional lo dispuesto en el último párrafo del artículo 154 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado 1976).

Art. 90. — Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán disponer el fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo anual complementario siempre que no excedan de tres (3) períodos en el año.

Art. 91. — Los convenios colectivos de trabajo referidos a las pequeñas empresas podrán modificar el régimen de extinción del contrato de trabajo.

Para los casos en que dichos convenios introduzcan, en el régimen de extinción, cuentas de capitalización individual, el Poder Ejecutivo nacional habilitará la utilización de los instrumentos de gestión previstos en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, o en el régimen de seguros.

Art. 92. — Las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario referidas a la pequeña empresa y decididas por la votación unánime de las representaciones que la integran, podrán ejercer iguales disponibilidades a las previstas en los artículos 89 y 90 de esta ley con relación a iguales institutos regulados en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario por la ley 22.248.

Sección V

Movilidad interna

Art. 93. — El empleador podrá acordar con la representación sindical signataria del convenio colectivo la redefinición de los puestos de trabajo correspondientes a las categorías determinadas en los Convenios Colectivos de Trabajo.

Sección VI

Preaviso

Art. 94. — En las pequeñas empresas el preaviso se computará a partir del día siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un (1) mes cualquiera fuere la antigüedad del trabajador.

Esta norma regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la presente ley.

Sección VII

Formación profesional

Art. 95. — La capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos.

El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la pequeña empresa en la que preste servicios, podrá solicitar a su empleador la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos.

Los convenios colectivos para pequeñas empresas deberán contener un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional.

Sección VIII

Mantenimiento y regulación de empleo

Art. 96. — Las pequeñas empresas, cuando decidan reestructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, podrán proponer a la asociación sindical respectiva la modificación de determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables.

La asociación sindical tiene derecho a recibir la información que sustente las pretensiones de las pequeñas empresas.

Si la pequeña empresa y la asociación sindical acordaran tal modificación, la pequeña empresa no podrá efectuar despidos por la misma causa durante el tiempo que dure la modificación.

Art. 97. — Cuando las extinciones de los contratos de trabajo hubieran tenido lugar como consecuencia de un procedimiento preventivo de crisis, el Fondo Nacional de Empleo podrá asumir total o parcialmente las indemnizaciones respectivas, o financiar acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos.

Sección IX

Negociación colectiva

Art. 98. — La entidad sindical signataria del convenio colectivo y la representación de la pequeña empresa podrán acordar convenios colectivos de trabajo para el ámbito de estas últimas.

La organización sindical podrá delegar en entidades de grado inferior la referida negociación.

Podrán, asimismo, estipular libremente la fecha de vencimiento de estos convenios colectivos. Si no mediare estipulación convencional en contrario, se extinguirán de pleno derecho a los tres meses de su vencimiento.

Art. 99. — Vencido el término de un convenio colectivo de trabajo o sesenta (60) días antes de su vencimiento, cualquiera de las partes signatarias podrá solicitar el inicio de las negociaciones colectivas para el ámbito de la pequeña empresa. A tal fin el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, deberá convocar a las partes.

Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Este principio supone los siguientes derechos y obligaciones;

- a) Concurrencia a la negociación y a las audiencias;
- b) Intercambio de información;
- c) Realización de esfuerzos conducentes para arribar a un acuerdo.

Art. 100. — En las actividades en las que no existiera un convenio colectivo de trabajo específico para las pequeñas empresas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá prever que en la constitución de la representación de los empleadores en la comisión negociadora se encuentre representado el sector de la pequeña empresa.

Art. 101. — A partir de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, será requisito para la homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el convenio colectivo de trabajo contenga un capítulo específico que regule las relaciones laborales en la pequeña empresa, salvo que en la actividad de que se tratare se acreditara la existencia de un convenio colectivo específico para las pequeñas empresas.

Art. 102. — Los convenios colectivos de trabajo para pequeñas empresas, durante el plazo de su vigencia, no podrán ser afectados por convenios de otro ámbito.

Sección X

Salud y seguridad en el trabajo

Art. 103. — Las normas de salud y seguridad en el trabajo deberán considerar, en la determinación de exigencias, el número de trabajadores y riesgos existentes en cada actividad. Igualmente deberán fijar plazos que posibiliten la adaptación gradual de las PE a la legislación.

Sección XI

Seguimiento y aplicación

Art. 104. — Créase una Comisión Especial de Seguimiento encargada de:

- a) Evaluar el impacto del título III de esta ley sobre el empleo, el mercado de trabajo, y la negociación colectiva;

- b) Elaborar un informe anual acerca de la evolución de los tres factores del inciso anterior en el ámbito de la pequeña empresa;
- c) Determinar el monto de la facturación anual, a los efectos previstos en el artículo 83 de esta ley.

Esta comisión estará integrada por tres (3) representantes de la Confederación General del Trabajo, tres (3) representantes de las organizaciones de Pequeños Empleadores, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que presidirá las deliberaciones.

La Comisión Especial de Seguimiento podrá, además:

- a) Intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación de este capítulo y que las partes interesadas decidieran someterle;
- b) Ser consultada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social con carácter previo a la reglamentación del presente capítulo.

Art. 105. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación del título III de la presente ley.

TITULO IV

Disposición final

Art. 106. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 8 de febrero de 1995.

Oswaldo Borda. — Miguel A. Balestrini. — Oscar S. Lamberto. — Délfór A. Giménez. — Carlos P. Dellepiane. — Carlos H. Golpe. — Daniel Baum. — Eduardo O. Camaño. — José L. Castillo. — Miguel H. D'Alessandro. — Jorge O. Folloni. — Germán Kammerath. — Ana R. Kessler. — Marcelo López Arias. — Marco A. Michelli. — Salomón A. Michitte. — María A. Salino. — Carlos E. Soria. — Carlos A. Sueiro. — Eduardo Varela Cid.

En disidencia parcial:

Carlos Gómez Centurión. — Carlos Abihaggle. — Naldo R. Brunelli. — Roberto S. Digón. — José M. Ibarbia. — Rodolfo Gazia. — Gustavo A. Green. — Horacio A. Macedo. — Elsa D. Maidana. — Marcelo J. Muniagurria. — Claudio A. Sebastiani.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, y por las razones y fundamentos desarrollados en el mensaje y las que oportunamente se expondrán en el recinto, aconsejamos la aprobación del presente dictamen.

Oswaldo Borda.

Fundamentos de la disidencial parcial

Señor presidente:

En tiempo y forma, y no obstante compartir el fundamento general subyacente en el proyecto en cuestión en cuanto al apoyo a las PYMES, creo necesario dejar expresada mi opinión de disenso con el proyecto bajo tratamiento en la regulación que el mismo efectúa en el título III de las "Relaciones de trabajo".

Las disidencias a señalarse, que se traducen en la propuesta de nuevo articulado, encuentran su causa en la diferente política que considero debe ser instrumentada para propender al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

Entiendo, y lo he sostenido en reiteradas oportunidades, que las PYMES constituyen el motor de la reactivación productiva que el país anhela, a cuya consecución los trabajadores dedican su cotidiana labor y por la cual han tolerado el reposo en sus espaldas del mayor sacrificio que nuestra sociedad ha efectuado.

Pero considero que la protección de las PYMES como un instrumento de política social que redundaría en beneficio global de la comunidad toda debe globalizar también los costos necesarios para proveer a tal protección. Debe ser sobre la comunidad toda, a través del Estado, en proporción a la capacidad de cada sector social, donde repose el peso de la protección a dichas empresas.

No resulta razonablemente defendible a criterio del suscrito que el trato más favorable dado por motivaciones de política social a una empresa lo sufra en desmedro de sus derechos el trabajador que de la misma depende.

No sólo asisten al razonamiento expuesto claros fundamentos de justicia social que impiden que responsabilidades del Estado se deleguen a los trabajadores en forma de subsidios que éstos deberán efectuar a las empresas que los emplean.

Razones de orden constitucional asisten al pensamiento que expreso.

La protección al trabajador posee rango constitucional (artículo 14 bis de la Carta Magna), y no puede vulnerarse el mismo en aras de una "protección a la pequeña empresa" que, destaco, carece de tal suprema raigambre.

La igualdad ante la ley, y su consecuente prohibición de discriminación, constituyen asimismo imperativos constitucionales que resultarían vulnerados de convertirse en norma positiva el proyecto bajo análisis.

El título III objeto de consideración incluye normas que crean arbitrarias discriminaciones entre trabajadores objetivamente iguales, que ponen su capacidad de trabajo al servicio de su empleadora, negando a los dependientes de las pequeñas empresas derechos que tienen reconocidos los de las empresas que no encuadran en tal calificación. Dicha filosofía discriminatoria entre lo que serán trabajadores de primera y trabajadores de segunda no se compadece con el imperativo de afianzar la justicia con que el Preámbulo de la Constitución Nacional responsabiliza al Estado.

Como consecuencia de lo expuesto, y sin perjuicio de las observaciones y disidencias que se expresarán a

cada artículo en particular, considero que los beneficios a otorgarse a las PYMES en cuanto a las cargas que para ellas pueden representar los derechos que la legislación hoy vigente reconoce a los trabajadores no puede traducirse en la pérdida o disminución de su disfrute por parte de éstos. He aquí donde el Estado debe asumir su rol de equilibrador social, garantizando a los trabajadores la protección que la Constitución Nacional expresamente consagra.

Los hasta aquí indicados son los fundamentos que motivan las disidencias respecto de algunos aspectos de este proyecto que creo equivocados.

I. *Definición de pequeña empresa.* Se considera elevada la cantidad de trabajadores componentes del plantel de la empresa dispuesta para ser calificada como pequeña empresa, considerando a tal fin adecuada la cifra de 25 trabajadores.

Se considera conveniente asimismo, a fin de dar mayor claridad a la norma, aclarar que a los efectos de esta ley se considera "plantel" al total de trabajadores que prestan tareas en la empresa, sean trabajadores directamente dependiente de la pequeña empresa (cualquiera sea la modalidad de contratación que una a las partes), de contratista o subcontratista que presten en la empresa principal tareas que hagan o a su actividad principal o accesoria a ésta, o de empresas de servicios eventuales en tanto no se acredite que concurren para esta contratación las circunstancias previstas en el artículo 3º, decreto 342/92.

Asimismo, a los efectos de prevenir la interposición fraudulenta de personas debe incorporarse como condición necesaria para ser definida como PYME que no más del 50 por ciento de su facturación semestral se efectúe a una misma empresa o grupo económico.

II. *Modalidades de contratación.* Las modalidades de contratación implementadas por la Ley Nacional de Empleo han demostrado su nula incidencia en la creación de puestos de trabajo. Por ello se derogan las normas que las implementaron, sustituyéndolas por un nuevo articulado que garantiza la efectiva negociación colectiva de su implementación y participación sindical en el seguimiento y evaluación del proyecto sin afectar los derechos del trabajador y asistiendo desde el Estado al empleador contratante. Para las pequeñas empresas se establece la financiación o asunción a cargo del Fondo Nacional de Empleo del total de la indemnización por extinción del contrato por vencimiento del plazo; la exención del 50 por ciento de las contribuciones previsionales —salvo las correspondientes a las obras sociales— y la exención de registro de los contratos promovidos ante la autoridad de aplicación.

III. Disponibilidad colectiva

a) *Licencia anual ordinaria.* Constituye responsabilidad indelegable del Estado la preservación de la salud de la población. Y el cumplimiento de dicha finalidad tienden los descansos regulados por la legislación laboral, sean diarios, semanales o anuales.

Por ende, se excluye del proyecto la posibilidad abierta a que en los convenios colectivos se negocie en per-

juicio de los derechos legales las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria.

b) *Sueldo anual complementario*. Por las consideraciones expuestas al inicio del presente no puede, en criterios de justicia, ser el trabajador quien subsidie a su empleador mediante la disminución de sus derechos. De considerarse gravoso para la pequeña empresa el pago en dos cuotas del sueldo anual complementario debe ser el propio Estado, como institución que comprende a toda la sociedad, quien debe financiar a la pequeña empresa su pago, sin afectar los derechos del trabajador.

c) *Indemnización por extinción*. Idénticas consideraciones motivan el obstáculo a que en las convenciones colectivas de trabajo referidas a las pequeñas empresas se modifique el régimen de extinción del contrato de trabajo en perjuicio de los trabajadores. Por ende, se deja a criterio del Poder Ejecutivo nacional la determinación del porcentaje que de las sumas que en concepto de indemnización con extinción del contrato de trabajo abonaren las pequeñas empresas podrán deducir de su obligación de pago del impuesto a las ganancias.

IV. *Movilidad interna*. Al respecto he de destacar que, en mi criterio, el artículo así titulado no regula la "movilidad interna" vedada por la normativa vigente, sino la redefinición, por intermedio de acuerdos colectivos de los puestos de trabajo incluidos en cada categoría convencional, encontrándose dicha posibilidad ya incluida en la sección titulada "Mantenimiento y Regulación del Empleo". En consecuencia, se excluye el artículo en cuestión por resultar sobreabundante.

V. *Preaviso*. Razones constitucionales y de justicia social ya expuestas impiden discriminar arbitraria y peyorativamente a los trabajadores dependientes de las pequeñas empresas, garantizando a todos los asalariados un piso legal mínimo igualitario. En consecuencia se propone la exclusión del artículo 94 del proyecto en tratamiento.

VI. *Formación profesional*. Considerando que la formación profesional es un derecho y deber del trabajador de la pequeña empresa, se le reconoce el consecuente derecho a la adaptación de su jornada de trabajo a las exigencias de los cursos a los que asista.

VII. *Mantenimiento y regulación del empleo*. En lo atinente la sección en cuestión, se ha eliminado la apertura a que el acuerdo colectivo modifique en perjuicio normas legales (estatutos), vedada por la Constitución Nacional y normativa laboral. Se reconoce el derecho de la asociación sindical a obtener la información que estime necesaria sobre el proyecto a encarar por la pequeña empresa que se invoca como justificativo de la modificación convencional propuesta. Se establece también la prohibición, durante el período que dure la modificación, de despedir personal sin existencia de justa causa fundada en injuria en los términos del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, debiendo en este caso efectuarse previa consulta con la entidad sindical y ocuparse la vacante producida con motivo de tal despido, como condición de validez del mismo.

El incumplimiento de la pequeña empresa con los requisitos y obligaciones que se disponen en este artículo, se sanciona con la pérdida de los beneficios que le reconoce la presente ley.

Para el caso de despidos que hubieran tenido lugar como consecuencia de un procedimiento de crisis, se garantiza al trabajador la percepción de la indemnización que legalmente corresponda, pudiendo el Fondo Nacional de Empleo asumir total o parcialmente el pago de las mismas.

VIII. *Negociación colectiva*. Con total resguardo de la autonomía colectiva, se faculta a la celebración de convenios colectivos de trabajo para el ámbito de la pequeña empresa, pudiendo la entidad sindical legítimamente delegar en entidades sindicales de grado inferior la negociación pertinente.

Se excluyen del proyecto las normas propuestas referentes al procedimiento de negociación colectiva y finalización de la vigencia del convenio colectivo por resultar coercitivas de la autonomía colectiva negocial.

Asimismo se establecen resguardos adecuados a fin de garantizar que la representación de los empleadores en la comisión negociadora se encuentre representado el sector de la pequeña empresa, salvo que exista una convención colectiva específica para su ámbito, excluyéndose la norma proyectada que limita la homologación del convenio a la efectiva integración de dicho sector lo cual importa dejar librado al arbitrio de la representación de la pequeña y mediana empresa la homologación de la convención colectiva.

A la imposibilidad de afectarse una convención colectiva para la pequeña empresa por una de ámbito superior se la exceptúa en el caso de encontrarse estas representadas en la respectiva comisión negociadora.

IX. *Salud y seguridad en el trabajo*. Se modifica el artículo incorporado al proyecto remitido en tanto la garantía de existencia de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, que hacen a la preservación de la salud e integridad psicofísica del trabajador, no puede quedar supeditada a la cantidad de trabajadores del establecimiento ni a pautas temporales de adaptación a las obligaciones legales. Constituye un imperativo insoslayable proteger la salud de los trabajadores, no pudiendo condicionarse dicha obligación a la cuantía de dependientes existentes en la empresa.

Por ende, las condiciones de higiene y seguridad deben exigirse únicamente en función de los riesgos de cada actividad.

X. *Incentivo a la creación de puestos de trabajo*. Por último, se establece que la cuantía o porcentaje de asistencia estatal brindada a la pequeña empresa, a través del Fondo Nacional de Empleo o de deducciones al Impuesto a las Ganancias, deberá ser proporcional a la cantidad de puestos que la pequeña empresa acredite haber creado en el año calendario anterior, delegando a la reglamentación de la ley la determinación de las pautas que cumplan la proporcionalidad dispuesta.

En base a las consideraciones expuestas, se someten a criterio de la comisión las modificaciones al proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo nacional.

TITULO III

Relaciones de trabajo

Sección I

Definición de pequeña empresa

Artículo 83: El contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña empresa (PE) se regularán por el régimen especial de la presente ley.

A los efectos de este capítulo, pequeña empresa es aquella que reúna las condiciones siguientes:

- a) Su plantel no supere los veinticinco (25) trabajadores;
- b) Tenga una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de esta ley;
- c) No destine a una misma empresa o grupo económico más del 50 por ciento de su facturación semestral.

A los fines de lo dispuesto en la presente ley se entenderá como plantel la totalidad de trabajadores que presten tareas en la empresa, sean trabajadores directamente dependientes de la PE, de contratista o subcontratista que presten en la empresa principal tareas que hagan a su actividad principal o accesorio, o de empresas de servicios eventuales en tanto no se acredite que concurren para esta contratación alguna de las circunstancias previstas por el artículo 3º del decreto 342/92.

Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley vinieran funcionando, el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1º de enero de 1995.

La negociación colectiva de ámbito superior a la empresa podrá modificar la condición referida al número de trabajadores definida en el segundo párrafo, punto a) de este artículo disminuyendo la cantidad máxima de trabajadores que componen el plantel necesario para ser considerada pequeña empresa.

Las pequeñas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres (3) años, siempre y cuando no superen un plantel de 40 personas o dupliquen la facturación indicados en el párrafo segundo de este artículo.

Sección II

Registro Unico de Personal

Artículo 84: Las empresas comprendidas en la presente ley podrán sustituir los libros y registros exigidos por las normas legales y convencionales vigentes por un registro denominado "Registro Unico de Personal"

Artículo 85: En el Registro Unico de Personal se asentará la totalidad de trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación y será rubricada por la autoridad administrativa laboral competente.

Artículo 86: En el Registro Unico de Personal quedarán unificados los libros, registros, planillas y demás elementos de contralor que se señalan a continuación:

- a) El libro especial del artículo 32 del régimen de contrato de trabajo (Ley de Contrato de Trabajo, texto ordenado 1976);
- b) La sección especial establecida en el artículo 13 del decreto 342/92;
- c) Los libros establecidos por la ley 12.713 y su decreto reglamentario 118.755/42 de trabajadores a domicilio;
- d) El libro especial del artículo 122 del régimen nacional del trabajo agrario de la ley 22.248.

Artículo 87: En el Registro Unico de Personal se hará constar el nombre y apellido o razón social del empleador, su domicilio y número de CUIT, y además se consignarán los siguientes datos:

- a) Nombre y apellido del trabajador y su documento de identidad;
- b) Número de CUIL;
- c) Domicilio del trabajador;
- d) Estado civil e individualización de sus cargas de familia;
- e) Fecha de ingreso;
- f) Tarea a desempeñar;
- g) Modalidad de contratación;
- h) Lugar de trabajo;
- i) Forma de determinación de la remuneración asignada, monto y fecha de su pago;
- j) Régimen previsional por el que haya optado el trabajador y, en su caso, individualización de su administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP);
- k) Toda modificación que se opere respecto de los datos consignados precedentemente y, en su caso, la fecha de egreso.

La autoridad de aplicación establecerá un sistema simplificado de denuncia individualizada de personal a los organismos de seguridad social.

Sección III

*Modalidades de contratación**De las modalidades destinadas a la promoción del empleo*

Artículo 88: *Régimenes excepcionales de fomento del empleo.* Los convenios colectivos de trabajo podrán prever regimenes excepcionales de contratación de trabajadores con la finalidad de fomentar el empleo y crear nuevos puestos de trabajo, en los casos siguientes:

- a) Lanzamiento de una nueva actividad dentro de la empresa;
- b) Apertura de nuevo establecimiento;

- c) Habilitación de nuevas líneas de producción;
- d) Habilitación de nuevos turnos de trabajo.

Artículo 89: Límites y resguardos convencionales. Plazos. Las partes podrán limitar la habilitación de estas modalidades a determinadas zonas, establecimientos o ramas de actividad, y podrán fijar los mecanismos o resguardos que estimen pertinentes para asegurarse el cumplimiento de los fines tenidos en vista para habilitar estas formas de contratación. También deberán precisar el plazo durante el cual se prevé autorizar a las empresas a acordar este tipo de contrataciones.

Artículo 90: Contrato de capacitación, entrenamiento o formación. Las partes signatarias de un convenio colectivo de trabajo también podrán autorizar la formalización de contratos de las características establecidas en este capítulo, con finalidad de capacitación, entrenamiento laboral o formación profesional, pudiendo requerir la intervención de organismos educativos o entidades públicas o privadas que cooperarán con los aspectos formativos o pedagógicos del proyecto, y en su caso, podrán otorgar certificados de habilitación.

Artículo 91: Implementación. Requisitos necesarios. Las empresas que deseen acogerse a este tipo de contrataciones, deberán convenir con la entidad sindical respectiva la aplicación de este instituto en establecimiento, lo que se materializará mediante acuerdo de partes, que deberá contener:

- a) Una enunciación del proyecto que la empresa decide encarar, precisándose las características del mismo, la inversión prevista, la estimación de los volúmenes de producción, ventas o servicios que se busca alcanzar y demás detalles de la iniciativa;
- b) La cantidad de trabajadores que se busca incorporar, la duración prevista, la categoría y especialidad de los mismos;
- c) Los mecanismos a través de los cuales la entidad sindical, y los representantes gremiales que actúen dentro de la empresa verificarán el cumplimiento de las metas y condiciones pactadas;
- d) Los mecanismos de consulta para autorizar despidos de trabajadores durante el plazo de contratación;
- e) El plazo de duración de los contratos, que no podrá ser inferior a seis meses, ni superior a veinticuatro meses.

El acuerdo deberá ser registrado ante la autoridad de aplicación, y las reformas o correcciones que el empleador desee introducir al proyecto original requerirá de la conformidad de la entidad sindical.

Artículo 92: Igualdad de trato. Regirá el principio de igualdad de trato entre los trabajadores comprendidos en el proyecto, y el resto del personal de establecimiento, pero los trabajadores contratados por el proyecto de fomento de empleo no podrán ser empleados en tareas propias del resto del establecimiento.

La remuneración y condiciones de trabajo, el encuadre convencional, la representación sindical serán los mismos para los trabajadores que se desempeñan en esta modalidad y los que prestan servicios bajo la forma de contrato de trabajo por tiempo indeterminado.

Artículo 93: Forma de los contratos. Registración. Los contratos deberán formalizarse por escrito, y registrarse ante la autoridad de aplicación dentro de los 15 días de celebrados.

Artículo 94: Conversión en contratos por tiempo indeterminado. Los contratos temporales previstos en este capítulo se convertirán en contratos de trabajo por tiempo indeterminado en los siguientes supuestos:

- a) Incumplimiento de los requisitos formales o sustanciales exigidos para los mismos;
- b) Incumplimiento de las condiciones pactadas en el acuerdo de empresa que autoriza su formalización;
- c) Incumplimiento del deber de registrar los contratos ante la autoridad de aplicación;
- d) Cuando se excediera el plazo máximo previsto para la modalidad respectiva;
- e) Cuando al vencimiento del plazo convenido y de las prórrogas autorizadas, el trabajador continuase prestando servicios en la empresa;
- f) Cuando el empleador violase lo dispuesto en el artículo 40 sobre incorporación de los trabajadores transitorios como permanentes;
- g) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por los artículos 96, 97 y 98 de esta ley.

Artículo 95: Despido antes del vencimiento del plazo. Si el empleador dispusiese el despido del trabajador antes del vencimiento del plazo pactado, resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 96 de esta ley.

Artículo 96: Prohibición de despidos sin justa causa durante el año posterior. Consulta en caso de invocar justa causa. Vacantes. Desde que el acuerdo quede formalizado, y hasta un año después de haber concluido el proyecto, el empleador no podrá disponer despidos sin invocación de justa causa. Los despidos con invocación de causa serán sometidos a consulta de la entidad sindical, y las vacantes que se produzcan serán cubiertas por trabajadores contratados por tiempo indeterminado.

Artículo 97: Prohibición de afectar a tareas ajenas al proyecto. El personal contratado bajo esta modalidad, no podrá ser afectado a tareas ajenas al proyecto acordado.

Artículo 98: Evaluación de resultados. Mantenimiento definitivo del nuevo emprendimiento. Con anterioridad a la finalización del proyecto la empleadora y la entidad sindical procederán a evaluar sus resultados, y en tanto se decida mantener en forma definitiva el nuevo emprendimiento se establecerá el número de trabajadores que quedarán incorporados bajo la forma de contratos de trabajo por tiempo indeterminado.

Los trabajadores contratados bajo la modalidad convenida tendrán derecho a ocupar los nuevos puestos de trabajo permanente que se creen.

Los trabajadores que no resulten incorporados, recibirán al vencimiento de su contrato, medio sueldo en concepto de indemnización por cada año de servicios o fracción superior a tres meses a cargo directo del empleador, y una suma igual que será soportada o financiada al empleador por el Fondo Nacional de Empleo en las condiciones que fije la reglamentación.

Artículo 99: *Exenciones contributivas.* Las contrataciones previstas en este capítulo gozarán de una reducción del 25 % de las cargas previsionales, con excepción de los aportes de obra social, conforme disponga el Poder Ejecutivo, así como de los beneficios o exenciones impositivas que se dispongan.

Artículo 100: *Beneficios para las pequeñas empresas.* Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas de contratación, previstas en los artículos 88 a 99 de la presente ley bajo las siguientes condiciones:

- a) No se requerirá el registro del contrato, previsto en el artículo 91 *in fine*, ante la autoridad de aplicación;
- b) El Fondo Nacional de Empleo podrá asumir a su cargo o financiar al empleador el pago del 100 % de indemnización prevista por el artículo 98 *in fine*, en las condiciones que fije la reglamentación;
- c) La exención contributiva dispuesta por el artículo 99 se elevará al 50 % de las cargas previsionales pertinentes, exceptuando las de Obra Social.

Sección IV

Sueldo anual complementario

Artículo 101: La reglamentación de la presente ley fijará la forma y condiciones en que el Fondo Nacional de Empleo financiará a las pequeñas empresas las sumas que éstas deben abonar a sus dependientes en concepto de sueldo anual complementario.

Sección V

Indemnizaciones por extinción

Artículo 102: Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional determinar qué porcentaje de las sumas abonadas por las pequeñas empresas en concepto de indemnización por extinción de contrato de trabajo podrán ser deducidas del pago del impuesto a las ganancias.

Sección VII

Formación profesional

Artículo 103: La capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de

las pequeñas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos.

El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la pequeña empresa en la que preste servicios, tendrá derecho a la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos.

Los convenios colectivos para pequeñas empresas deberán contener un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional.

Sección VIII

Mantenimiento y regulación del empleo

Artículo 104: Las pequeñas empresas, cuando decidan reestructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, podrán proponer a la asociación sindical respectiva la modificación de determinadas regulaciones colectivas.

La asociación sindical tiene derecho a recibir la información que sustente las pretensiones de las pequeñas empresas, así como del proyecto que la empresa decide encarar con los alcances indicados en el artículo 91 inciso a) de la presente ley.

Si la pequeña empresa y la asociación sindical acordaran tal modificación, la pequeña empresa no podrá efectuar despidos por la misma causa o incausados durante el tiempo que dure la modificación.

En casos de existencia de justa causa deberá previamente, someterse el despido, como condición de validez, a consulta de la entidad sindical y cubrirse la vacante que se produzca mediante contratación de un nuevo trabajador.

El incumplimiento de los recaudos y obligaciones previstas por el presente artículo implicará para la empresa la pérdida de los derechos y beneficios que le confiere la presente ley.

Artículo 105: Cuando las extinciones de los contratos de trabajo hubieran tenido lugar como consecuencia de un procedimiento preventivo de crisis el Fondo Nacional de Empleo podrá asumir total o parcialmente las indemnizaciones respectivas en las condiciones que fije la reglamentación.

Sin perjuicio del pago de las indemnizaciones pertinentes, podrá financiar acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos.

Sección IX

Negociación colectiva

Artículo 106: La entidad sindical con personería gremial legitimada para negociar y la representación de la pequeña empresa, en el marco de la autonomía colectiva, podrán acordar convenios colectivos de trabajo para el ámbito de estas últimas.

La entidad sindical legitimada para negociar podrá delegar en entidades de grado inferior la referida negociación.

Artículo 107: En las actividades en las que no existiera un convenio colectivo de trabajo específico para las pequeñas empresas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá prever que en la constitución de la representación de los empleadores en la comisión negociadora se encuentre representado el sector de la pequeña empresa.

Artículo 108: A partir de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, será requisito para la homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que para la conformación de la representación empresarial en la Comisión Negociadora se hubiese invitado a participar a representantes de las pequeñas y medianas empresas del sector, salvo que se acredite que en la actividad de que se tratare la existencia de un convenio colectivo específico para las pequeñas empresas.

Artículo 109: Los convenios colectivos de trabajo para pequeñas empresas, durante el plazo de su vigencia, no podrán ser afectados por convenios de ámbito superior, salvo que en estos esté integrada la representación de las pequeñas empresas.

Sección X

Salud y seguridad en el trabajo

Artículo 110: Las normas de salud y seguridad en el trabajo deberán considerar, en la determinación de exigencias, los riesgos existentes en cada actividad.

Sección XI

Seguimiento y aplicación

Artículo 111: Créase una comisión especial de seguimiento encargada de:

- a) Evaluar el impacto del título III de esta ley sobre el empleo, el mercado de trabajo, y la negociación colectiva;
- b) Elaborar un informe anual acerca de la evolución de los tres factores del inciso anterior en el ámbito de la pequeña empresa;
- c) Determinar el monto de la facturación anual, a los efectos previstos en el artículo 93 de esta ley.

Esta comisión estará integrada por tres (3) representantes de la Confederación General del Trabajo, tres (3) representantes de las organizaciones de pequeños empleadores, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que presidirá las deliberaciones.

La Comisión Especial de Seguimiento podrá, además:

- a) Intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación de este capítulo y que las partes interesadas decidieran someterle;
- b) Ser consultada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social con carácter previo a la reglamentación del presente capítulo.

Artículo 112: El ministro de Trabajo y Seguridad Social, será la autoridad de aplicación del título III de la presente ley.

Artículo 113: La reglamentación de la presente ley deberá contemplar que la cuantía o porcentaje de la asistencia estatal a la pequeña empresa, a través del Fondo Nacional de Empleo o deducciones del impuesto a las ganancias, debe guardar relación proporcional con el aumento de los puestos de trabajo que la pequeña empresa acredite haber creado en el año inmediato anterior.

Sección XII

Artículo 114: Deróganse los artículos 27 a 80 de la ley 24.013.

Naldo Bruneili.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, han considerado el mensaje y proyecto de ley mediante el cual se establece un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), creación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR); y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconsejan la aprobación de las modificaciones introducidas a los siguientes artículos:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, ...

Relaciones de trabajo

Sección I

Definición de pequeña y mediana empresa

Artículo 83: El contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña y mediana empresa (PYME) se regularán por el régimen especial de la presente ley.

A los efectos de este capítulo, pequeña y mediana empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes:

- a) Su plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores;
- b) Tenga una facturación anual no superior a tres millones de pesos.

Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley estuvieran funcionando, el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1° de enero de 1995.

Las pequeñas y medianas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres (3) años, siempre y cuando no dupliquen el plantel o la facturación indicados en el párrafo segundo de este artículo.

Sección II

Registro Unico de Personal

Artículo 84: Las empresas comprendidas en la presente ley podrán sustituir los libros y registros exigidos por las normas legales y convencionales vigentes por un registro denominado "Registro Unico de Personal".

Artículo 85: En el Registro Unico de Personal se asentará a la totalidad de los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación y será rubricado por la autoridad administrativa laboral competente.

Artículo 86: En el Registro Unico de Personal quedarán unificados los libros, registros, planillas y demás elementos de contralor que se señalan a continuación:

- a) El libro especial del artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado 1976);
- b) La sección especial establecida en el artículo 13 del decreto 342/92;
- c) El libro especial del artículo 122 del Régimen Nacional de Trabajo Agrario de la ley 22.248.

Artículo 87: En el Registro Unico de Personal se hará constar el nombre y apellido o razón social del empleador, el domicilio y número de CUIT, y además se consignarán los siguientes datos:

- a) Nombre y apellido del trabajador y su documento de identidad;
- b) Número de CUIL;
- c) Domicilio del trabajador;
- d) Estado civil e individualización de sus cargas de familia;
- e) Fecha de ingreso;
- f) Tarea a desempeñar;
- g) Modalidad de contratación;
- h) Lugar de trabajo;
- i) Forma de determinación de la remuneración asignada, monto y fecha de su pago;
- j) Régimen previsional por el que haya optado el trabajador y, en su caso, individualización de su administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP);
- k) Toda modificación que se opere respecto de los datos consignados precedentemente y, en su caso, la fecha de egreso.

La autoridad de aplicación establecerá un sistema simplificado de denuncia individualizada de personal a los organismos de seguridad social.

Sección III

Modalidades de contratación

Artículo 88: Las pequeñas y medianas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación pro-

movidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo, 24.013, bajo las siguientes condiciones:

- a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo;
- b) No se requerirá el registro del contrato previsto en el artículo 18, inciso b), y 31 de la Ley Nacional de Empleo.

Sección IV

Disponibilidad colectiva

Artículo 89: Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña y mediana empresa podrán modificar las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria, en lo que exceda el plazo mínimo de catorce días corridos.

No podrá ser materia de disponibilidad convencional lo dispuesto en el último párrafo del artículo 154 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado 1976).

Sección V

Movilidad interna

Artículo 90: El empleador podrá acordar con la representación sindical signataria del convenio colectivo la redefinición de los puestos de trabajo correspondientes a las categorías determinadas en los convenios colectivos de trabajo. En ningún caso podrá afectarse el nivel jerárquico asignado al trabajador.

Sección VI

Preaviso

Artículo 91: En las pequeñas y medianas empresas el preaviso se computará a partir del día siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un mes cualquiera fuere la antigüedad del trabajador.

Sección VII

Formación profesional

Artículo 92: La capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos.

El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la pequeña y mediana empresa en la que preste servicios, podrá solicitar a su empleador la adecuación de su jornada laboral a la exigencia de dichos cursos. El empleador concederá tal solicitud teniendo en cuenta las posibilidades de la empresa. La negativa infundada del empleador será considerada como incumplimiento contractual sin perjuicio de su eventual encuadramiento en otras figuras legales o convencionales.

Los convenios colectivos para pequeñas y medianas empresas deberán contener un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho, a la capacitación profesional.

Artículo 93: Cuando las extinciones de los contratos de trabajo hubieran tenido lugar como consecuencia de un procedimiento preventivo de crisis, el Fondo Nacional de Empleo podrá financiar acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos.

Sección VIII

Negociación colectiva

Artículo 94: La entidad sindical con personería gremial legitimada para negociar y la representación de la pequeña y mediana empresa podrán acordar convenios colectivos de trabajo para el ámbito de estas últimas.

La entidad sindical podrá delegar en entidades de grado inferior la referida negociación.

Podrán asimismo estipular libremente la fecha de vencimiento de estos convenios colectivos que se extinguirán de pleno derecho, salvo pacto en contrario, transcurrido un (1) año de su vencimiento.

Artículo 95: Vencido el término de un convenio colectivo de trabajo o sesenta (60) días antes de su vencimiento, cualquiera de las partes signatarias podrá solicitar el inicio de las negociaciones colectivas para el ámbito de la pequeña y mediana empresa. A tal fin el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá convocar a las partes.

Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Este principio supone los siguientes derechos y obligaciones:

- a) Concurrencia a la negociación y a las audiencias;
- b) Intercambio de información;
- c) Realización de esfuerzos conducentes para arribar a un acuerdo.

Artículo 96: En las actividades en las que no existiera un convenio colectivo de trabajo específico para las pequeñas y medianas empresas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá prever que en la constitución de la representación de los empleadores en la comisión negociadora se encuentre representado el sector de la pequeña y mediana empresa.

Artículo 97: A partir de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, será requisito para la homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el convenio colectivo de trabajo contenga un capítulo específico que regule las relaciones laborales en la pequeña empresa, salvo que en la actividad de que se tratare se acreditara la existencia de un convenio colectivo específico para las pequeñas y medianas empresas.

Artículo 98: Los convenios colectivos de trabajo para pequeñas y medianas empresas, durante el plazo de su vigencia, no podrán ser afectados por convenios de otro ámbito.

Sección IX

Promoción del empleo

Artículo 99: Créase un régimen de promoción del empleo al que podrán acogerse todas las empresas a que se refiere el artículo 83 de esta ley siempre que al momento de su acogimiento:

- a) Hayan mantenido la misma cantidad de personal en relación de dependencia con contrato de tiempo indeterminado durante los seis meses anteriores; excepción hecha de las vacantes que se hayan producido por renuncia, jubilación o despido con causa;
- b) No registren deuda alguna con el Sistema Único de la Seguridad Social.

Artículo 100: Los beneficiarios del régimen podrán imputar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado hasta el veinticinco por ciento (25 %) del total de las remuneraciones abonadas al personal que se encuentre trabajando al finalizar cada período fiscal, en las condiciones del artículo anterior.

Artículo 101: Para continuar dentro del régimen los beneficiarios deberán mantener la misma cantidad de personal en relación de dependencia, en las condiciones del inciso a) del artículo 99, durante al menos seis meses contados a partir de su acogimiento al mismo.

Asimismo, durante todo el lapso que se mantengan en él no deberán adeudar suma alguna al Sistema Único de la Seguridad Social.

Artículo 102: Las disposiciones de la presente ley no obstan a la aplicación adicional de beneficios o franquicias más amplios otorgados por otras leyes o decretos de carácter nacional o local, o que se otorguen en el futuro.

Artículo 103: Los poderes ejecutivos de cada provincia serán autoridad de aplicación de este régimen de promoción del empleo en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 104: El incumplimiento de esta ley o su decreto reglamentario por parte de los beneficiarios, dará lugar a la pérdida del beneficio acordado, debiendo reintegrar los créditos fiscales utilizados en los últimos seis meses, sin perjuicio de las sanciones que pudiesen corresponder por aplicación de la ley 11.683 (t.o. 1978) y sus modificaciones.

Artículo 105: El presente régimen de promoción del empleo tendrá una vigencia de cinco (5) años, y podrá ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional por única vez y por un lapso no mayor que el establecido precedentemente.

Sección X

Información y consulta

Artículo 106: Los derechos de información y consulta que se establecen, serán ejercidos por los re-

presentantes sindicales en la empresa y, si éstos no existieren, mediante delegados electos por los trabajadores.

1. A solicitud de la representación sindical en la empresa, los empleadores deberán informar fehacientemente sobre la situación y evolución económica de la empresa y, en particular, en aspectos relativos a la evolución del empleo, los programas de producción, los proyectos de información profesional y las innovaciones tecnológicas y organizativas que tengan relación con las condiciones de trabajo.

La información precedente deberá proveerse tan pronto su naturaleza lo haga posible. Salvo que exista una causa fundada que lo justifique, dicha información no podrá ser solicitada en más de cuatro oportunidades por año calendario.

2. Será obligación del empleador consultar a la representación sindical en los casos en que se introduzcan en las empresas cambios tecnológicos que afecten a los trabajadores en lo que se refiere a las condiciones laborales y a la organización y gestión del trabajo; cuando se produzcan reestructuraciones o fusiones de empresas que afecten el empleo de los trabajadores; con motivo de procedimientos de suspensión o despidos colectivos; o cuando haya trabajadores afectados por políticas de empleo, llevadas a cabo por las empresas en que trabajan.

Las consultas deberán efectuarse con adecuada anticipación, de modo de posibilitar el estudio y la evacuación de las mismas en tiempo oportuno. El criterio que la representación sindical sustente al expedirse no obligará al empleador, pero si éste procediera de modo distinto al que fuera aconsejado, deberá informar a aquella representación las razones que le determinaron a actuar del modo en que lo hizo.

3. El incumplimiento de las obligaciones impuestas al empleador en los incisos precedentes será sancionado con multa de hasta el diez por ciento (10 %) del importe total de las remuneraciones pagadas por el empleador en el mes inmediato anterior a aquel en que se constata la infracción.

La autoridad administrativa del trabajo graduará prudencialmente la multa teniendo en cuenta los antecedentes del infractor y la naturaleza y gravedad de la infracción comprobada.

Sección XI

Artículo 107: El presente régimen es de excepción y se aplica a los contratos de trabajo celebrados con posterioridad a la promulgación de la presente ley

Artículo 108: El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación del título III de la presente ley.

Sala de las comisiones, 8 de febrero de 1995.

Alcides H. López. — Elisa B. Carca. —
Alejandro M. Nieva. — Pedro J. Nocau.
— Rafael M. Pascual. — Horacio F.
Pernasetti.

INFORME

Honorable Cámara:

Los firmantes del dictamen en minoría referido al título III del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo sobre régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (expediente 86-P.E.-94), hemos examinado las normas que se proponen con referencia a las relaciones laborales en esas empresas.

No compartimos tampoco el contenido de los títulos II y III del mismo proyecto por considerar que básicamente sólo trasunta expresiones de deseos cuya concreción no depende de su transcripción normativa sino de la decisión de llevar adelante políticas que favorezcan a la pequeña y mediana empresa, para lo cual el gobierno nacional cuenta ya con todos los instrumentos necesarios, y porque no se ha reflexionado acabadamente acerca de la viabilidad de las sociedades que se proponen como herramienta para el auténtico abaratamiento del crédito.

Sin embargo, a fin de no entorpecer el tratamiento del proyecto nos abocamos específicamente a los temas vinculados a la competencia de la Comisión de Legislación del Trabajo.

En tal sentido, las disposiciones que aconsejamos tienden a favorecer la dinámica de las relaciones laborales en la pequeña y mediana empresa, atendiendo tanto a las necesidades por las que atraviesan y a su condición de importantes generadores de empleo en la Argentina, como también al sostenimiento de las instituciones fundamentales del derecho del trabajo y la tutela de los legítimos intereses de los trabajadores, en procura de un equilibrio adecuado que redunde en beneficios comunes para empleados y empleadores.

En esa inteligencia, nos parece menester tanto incluir a las medianas empresas en el régimen, como no dejar librada la determinación de cuáles serán aquellas en que se aplicará a la decisión de una innecesaria comisión en la que ni siquiera estaría garantizada la real representatividad de sus integrantes. Por ello, es aconsejable —como lo hacemos— fijar el monto de facturación anual en el mismo texto legal.

Asimismo, no resulta aceptable posibilitar la modificación del régimen de extinción de los contratos de trabajo por las convenciones colectivas, en el entendimiento que podrían generarse irritativas diferencias entre los trabajadores al tiempo que se pone en riesgo la vigencia efectiva de la garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario.

Del mismo modo, tampoco parece posible que las normas relativas a higiene y seguridad del trabajo sean

susceptibles de una aplicación diferenciada, toda vez que el bien que se dirigen a tutelar no es otra cosa que la salud psicofísica de los trabajadores.

Introducimos como medida de fomento del empleo la posibilidad que las pequeñas y medianas empresas imputen como crédito fiscal a cuenta del impuesto al valor agregado un porcentaje del importe que abonan en concepto de remuneraciones, bajo determinadas condiciones. Y asimismo, incorporamos el derecho de información y consulta de los trabajadores.

Por todas estas razones y las demás que se exponen en el recinto en oportunidad de su tratamiento, aconsejamos la aprobación del dictamen que acompañamos.

Alcides H. López.

ANTECEDENTE

Mensaje del Poder Ejecutivo

Buenos Aires, 19 de enero de 1995.

Al Honorable Congreso de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley para el establecimiento de un régimen especial para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).

Este segmento empresarial contribuye generando aproximadamente el cuarenta por ciento (40 %) del producto bruto interno y ocupa más del sesenta por ciento (60 %) de la mano de obra de nuestro país. Por lo tanto, sin perjuicio de la importante contribución que realizan otras empresas de mayor dimensión económica, es correcto afirmar que la riqueza de la República Argentina se apoya muy significativamente en el segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas que conforman su aparato productivo.

Las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) constituyen, entonces, un factor clave de estabilidad y competitividad. Su importante papel en materia de creación de riqueza y generación de empleo, su flexibilidad de adaptación a los cambios producidos por los ciclos económicos y su gran sensibilidad a los cambios tecnológicos, contrastan con las desventajas inherentes a su dimensión a saber: inadecuadas condiciones de financiamiento; una legislación laboral que conspira contra su propia productividad y contra la generación de más fuentes de trabajo, déficit en la capacitación de su personal, dificultad para el acceso a mejores tecnologías, excesivos requisitos burocráticos en sus relaciones con el Estado, etcétera. Es decir que las micro, pequeñas y medianas empresas, aun realizando un importante aporte para el bienestar de los habitantes de la República, no cuentan todavía con posibilidades similares a las de las empresas más grandes.

El crecimiento económico, la generación creciente de empleos, la transparencia de los mercados, una distribución equitativa de la riqueza y la participación de las economías regionales en este proceso de transformación económica, sólo serán sostenibles en el largo plazo

si nuestro país desarrolla un sector de Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) fuerte, dinámico y con capacidad de competir en una economía integrada al mercado internacional.

La apertura de la economía argentina y su integración a acuerdos de integración económica regional como el Mercado Común del Sur (Mercosur), suman, a su vez, un desafío adicional a esta situación descripta. Surge entonces como evidente, la necesidad de que el Estado nacional promueva medidas de corte horizontal que tiendan a igualar las oportunidades y las condiciones de producción entre los diferentes segmentos y sectores de la economía nacional.

En este contexto, la primera política que tenemos para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) es la estabilidad con crecimiento. Decimos esto, porque sólo en el marco del crecimiento y la estabilidad económica es posible desarrollar políticas específicas para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) que sean eficaces.

Nuestras políticas para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES) son básicamente horizontales; es decir, políticas genéricas que puedan llegar a las pequeñas y medianas empresas según su necesidad y su posibilidad. No es posible diseñar trajes a medida para las pequeñas y medianas empresas (PYMES); miles y miles de pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el agro, la industria y el comercio, produciendo, fabricando e intercambiando miles de productos, sólo son susceptibles de ser alcanzadas por políticas horizontales.

Por otra parte, resulta fundamental desarrollar un enfoque integrado con la participación del sector público y el sector privado para concurrir a satisfacer las necesidades de financiación, capacitación y asesoramiento indispensables para orientar la reconversión y el crecimiento de la pequeña y mediana empresa.

Promover el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) es objetivo prioritario del gobierno nacional. Para ello es menester facilitar un "medio ambiente económico" propicio al crecimiento de estas organizaciones empresarias.

Consciente de ello, el Poder Ejecutivo ha preparado este proyecto de ley que pone a consideración de vuestra honorabilidad y que cuenta con tres capítulos:

I. Disposiciones generales

En este capítulo el proyecto de ley a considerar por vuestra honorabilidad dispone aspectos básicos a los fines de delimitar el universo al que se le aplicará la presente disposición. A tal efecto el proyecto encomienda a la autoridad de aplicación la tarea de definir, de acuerdo a los instrumentos normativos a su alcance, qué se considerará pequeña y mediana empresa para acceder a los beneficios del presente proyecto de ley. Se ha adoptado este criterio en razón de la necesidad de aplicar modalidades flexibles y dinámicas que permitan una mejor adaptación a la evolución de la economía argentina.

Se eleva, asimismo, al rango de ley, una serie de instrumentos, planes y programas ya en marcha a los fines

de cristalizar en el tiempo el accionar del Estado en materia de asistencia financiera y técnica a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Es así que se incorporan en un todo las líneas de financiamiento y el régimen de formación de consorcios del Plan Trienal de Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (actualmente decretos 2.586/92, 2.418/93, 991/93, 1.223/93 y resoluciones del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, Secretaría de Industria 126/93, 158/93 y 152/94), instruyendo, a modo complementario, al Banco de la Nación Argentina y al Banco de Inversión y Comercio Exterior respecto de la instrumentación de líneas especiales de financiación para pequeñas y medianas empresas (PYMES). Por otra parte se dispone que la banca oficial apoye la utilización de los mecanismos existentes en el mercado de capitales por parte de este segmento empresarial a través de la emisión de cédulas hipotecarias y obligaciones negociables.

El presente proyecto contempla además, el estímulo al sector privado para la constitución de sociedades conocidas como "calificadoras de riesgo" especializadas en evaluar el desempeño, la solidez y el riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas con al finalidad de facilitar su operatoria financiera y comercial, dotando así al sistema de una mayor transparencia en sus transacciones.

En lo atinente al acceso de información y a la asistencia técnica por parte de las pequeñas y medianas empresas se crea un Sistema Único Integrado de Información y Asesoramiento para Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), al cual se incorporarán todas las áreas del sector público que cuenten con información de interés para estas empresas. Se invitará al sector privado a participar de este sistema único. Asimismo, el proyecto dispone que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación, deberá tomar los recaudos necesarios con el fin de asegurar una adecuada cobertura en todo el territorio nacional, previendo que la información y el asesoramiento deberán tener un carácter integral, atendiendo cuestiones tan diversas como las tecnológicas, las referidas a los estándares de calidad, las organizativas, las contables, las financieras y toda otra cuestión que resulte esencial para incrementar la productividad de la pequeña y mediana empresa nacional.

A tal fin, se fortalecerán: la constitución de los polos productivos, el Programa de Desarrollo de Proveedores, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Minera (Intemin), el Centro de Información Estadística e Industrial (CIEI) con sus centros de información PYME (CIP), Fundaciones Export. Ar e Invertir, Ventanilla PYME, Programa Cambio Rural y el Sistema de Fortalecimiento de Estructuras de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES). Como medida adicional, el proyecto prevé la creación, por parte del Estado nacional, de un fondo de garantías a los fines de facilitar la obtención de créditos a las empresas que participan de los programas antes descriptos.

Otro de los temas fundamentales para el efectivo crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas em-

presas es la instrumentación de un efectivo sistema de capacitación empresarial. Para ello, a través del presente proyecto a consideración de vuestra honorabilidad, se desarrolla el Programa Nacional de Capacitación de cuadros empresarios y gerenciales de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), contemplando una integración efectiva entre el Estado nacional, las provincias y las cámaras y entidades empresarias.

Al igual que otros ordenamientos vigentes, este proyecto incluye la posibilidad de que el Estado nacional mediante propuesta del Poder Ejecutivo en ocasión de la remisión a ese Honorable Congreso de la Ley de Presupuesto, prevea efectuar montos mínimos de sus compras y medianas empresas. De esta forma, se reafirma el carácter de prioritario que adquiere el sector de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) como vehículo para alcanzar mayores tasas de empleo y por lo tanto, una distribución más equitativa de la riqueza.

Otro aspecto importante y novedoso de la propuesta remitida a vuestra honorabilidad, es la creación de un registro nacional de empresas PYMES. Este registro, que las dividirá por rama de actividad, permitirá un conocimiento más acabado del sector posibilitando así, un mejor diseño de políticas e instrumentos más adecuados para su apoyo. Se instrumentarán asimismo, medidas tendientes a simplificar los trámites burocráticos que las pequeñas y medianas empresas deban realizar en lo atinente a sus obligaciones con el Estado nacional, promoviéndose que idénticas medidas sean adoptadas por los estados provinciales y municipios.

Por último, este apartado prevé la afectación de los fondos provenientes de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYPE) (leyes 21.542 y 23.020) a la atención de los gastos que demanden la implementación durante el año 1995 de los nuevos instrumentos creados a partir del presente proyecto. Esta medida posibilitará la movilización de recursos que se encuentran hoy sin destino para el desarrollo de planes, proyectos y programas que redunden en beneficio de las pequeñas y medianas empresas argentinas.

II. De las sociedades de garantía recíproca

Uno de los más importantes problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (PYMES) está dado por la dificultad de acceder a una financiación adecuada a sus posibilidades viendo limitada así, su capacidad de expansión y crecimiento. Las micro, pequeñas y medianas empresas cuentan con un capital social escaso que limita su capacidad financiera y sus márgenes de maniobra. Esta limitación, en términos relativos con la gran empresa, se manifiesta por una insuficiencia de garantías ante las entidades de crédito, dificultad para acceder directamente al mercado de capitales, mayor distanciamiento de los centros de decisión financiera y una acusada carencia de información y asesoramiento en esta materia.

Para atacar este problema, este título del presente proyecto de ley crea las sociedades de garantía recíproca.

Estas sociedades arriba mencionadas (en adelante SGR) se crean con el carácter de sociedades anónimas, por lo que están reguladas por la Ley de Sociedades Comerciales (19.550) y sus modificatorias en todo lo atinente a su carácter societario en aquellas cuestiones no reservadas a la presente ley. No obstante ello, dada la importancia que estas sociedades de garantía recíproca (SGR) tienen para un conjunto importante de la economía argentina y ante la necesidad de que por vía reglamentaria el sistema funcione adecuadamente, la autoridad de aplicación de la presente ley recae sobre el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos y en cuanto a sus relaciones con las entidades financieras, el Banco Central de la República Argentina ejercerá las funciones inherentes a la superintendencia.

Por lo tanto, las sociedades de garantía recíproca son sociedades anónimas en lo referente al capital social y a la responsabilidad de los socios. Estas sociedades tienen que ofrecer garantías sólidas a las entidades financieras, y deben contar con una activa participación de las pequeñas y medianas empresas a las que apoyan e impulsan financieramente, las que a su vez respaldan las garantías que las sociedades de garantía recíproca (SGR) les otorga mediante contragarantías adecuadas.

En cuanto al objeto social principal de estas sociedades, estará constituido por el otorgamiento de garantías a sus socios, pudiendo también en forma accesorias, asesorar a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en lo atinente a su financiamiento. Los socios serán de dos tipos protectores y partícipes. Los primeros son todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo; los segundos, es decir, los partícipes serán las pequeñas y medianas empresas, sean estas personas físicas o jurídicas que reúnan las condiciones que se establezcan en los estatutos societarios. A los efectos de la constitución de las sociedades de garantía recíproca (SGR), estas sociedades deberán contar con un mínimo de doscientos (200) socios partícipes.

Respecto al capital social de las sociedades de garantía recíproca (SGR), el mismo estarán integrado por los aportes de los socios y representado por acciones ordinarias, nominativas, de igual valor nominal. La participación de los socios protectores no podrá exceder, en conjunto, del cuarenta y nueve por ciento (49 %) del capital social; y la participación de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5 %) del mismo. De esta manera se asegura el cumplimiento del objeto social de las sociedades de garantía recíproca (SGR) al otorgar la mayoría del paquete accionario a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Asimismo a los fines de otorgar mayor seguridad al sistema, está previsto en el presente proyecto de ley la constitución de un fondo de riesgo.

Con el objeto de estimular la participación en el capital y el fondo de riesgo de las sociedades de garantía recíproca (SGR), las empresas que efectúen dichos aportes serán beneficiadas con una deducción impositiva de las utilidades imponibles en sus respectivas actividades, por un monto equivalente al del aporte efectuado.

Por otro lado, los contratos de garantía recíproca realizados mediante este régimen, gozarán del mismo tratamiento impositivo, que las exenciones previstas en el artículo 20 de la ley 20.628, (t.o. en 1988) y en la ley 23.349, y sus modificatorias.

A los fines de que la garantía otorgada por las sociedades de garantía recíproca (SGR) tenga la receptividad conveniente para un adecuado financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PYMES), esta normativa prevé que el Banco Central de la República Argentina dispondrá las medidas conducentes para promover la aceptación de las garantías concedidas otorgándoles el carácter de garantías preferidas.

III. Relaciones laborales

El carácter necesariamente genérico y abstracto de nuestras normas laborales así como una casi inevitable sujeción de las pequeñas empresas a las soluciones negociadas colectivamente por las grandes empresas que han ejercido un monopolio de hecho sobre las representaciones patronales en los convenios colectivos, ha condenado a esas unidades productivas a sufrir las consecuencias de un régimen normativo-laboral que no ha podido acompañar la evolución de las técnicas productivas y de gestión empresarial aptas para responder a los requerimientos cada vez más exigentes de un mercado globalizado.

El convenio colectivo de trabajo, el instrumento más idóneo para concretar esa necesaria adaptación de las normas generales a las particularidades de cada actividad y de cada unidad productiva, en razón de una normativa obsoleta y de la ausencia de una diversidad negocial, ha sido sustraído a la posibilidad de constituirse en cauce natural de superación de las rigideces apuntadas.

La rigidez de las normas jurídico-laborales y la pobreza de los progresos en la negociación colectiva han sido los factores que en mayor medida han obstaculizado hasta el presente que la pequeña empresa se presentara como el adecuado instrumento dinámico de crecimiento económico y de generación de nuevos puestos de trabajo.

El título sobre relaciones laborales del proyecto de ley que hoy ponemos a vuestra consideración espera constituirse en el punto de partida inexcusable para revertir el proceso indicado.

La definición de la pequeña empresa es una cuestión necesariamente ardua ya que debe conciliar las exigencias objetivas de seguridad jurídica con los requerimientos específicos vinculados a las particularidades de cada rama de actividad, zona geográfica y etapa evolutiva de la empresa. La definición elegida tiende, en la medida en que ello es posible, a satisfacer esta doble exigencia.

Una perturbación que es necesario atenuar para la pequeña empresa es aquella derivada de los costos administrativos y burocráticos de su organización, por lo que en lo relativo al registro de su personal y a su relación con los organismos de la seguridad social, la solución propuesta por el texto aspira a unificar los registros y a simplificar los trámites, sin que ello vaya

en desmedro de la certeza en el registro de los trabajadores, sino por el contrario, la facilitación de los trámites traerá como necesario corolario el estímulo a una mayor registración de los trabajadores.

El texto propuesto a vuestra consideración tiende además a redimensionar las modalidades contractuales promovidas aprobadas por la Ley Nacional de Empleo 24.013, eliminando algunos requisitos que han conspirado contra su efectiva utilización, lo que se estima constituirá un aliciente para la generación de nuevos puestos de trabajo a nivel de la pequeña empresa.

En igual línea, pero atendiendo ya al resguardo del empleo existente, se inscriben las previsiones del proyecto sobre mantenimiento y regulación del empleo para las hipótesis de reestructuración de las pequeñas empresas.

Cuestiones diversas como la regulación del preaviso, movilidad interna formación profesional y salud y seguridad en el trabajo encuentran en el proyecto soluciones particularizadas para este importante segmento de la actividad económica y la ocupación laboral.

El particular funcionamiento interno de estas unidades productivas y de servicios hace indispensable dotarlas del marco normativo adecuado para ajustarlo a las necesidades cambiantes derivadas de las exigencias del mercado, lo que implica el reconocimiento de un mecanismo de adaptación interno flexible que la negociación colectiva necesariamente ha de complementar.

Las normas vinculadas con el procedimiento de crisis se dirigen a dotar a la pequeña empresa del instrumento adecuado para responder debidamente —en el plano laboral— a las situaciones de crisis con el fin de preservar la fuente de trabajo introduciendo las modificaciones que resultaren necesarias.

La sección dedicada a la negociación colectiva es ciertamente una de las más importantes. Lejos de constituir una norma restrictiva de la negociación colectiva configura una norma promocional destinada a estimular una forma específica y diferenciada de negociación adaptada estrechamente a las necesidades de la pequeña empresa que ha de contribuir seguramente al enriquecimiento del contenido de los convenios colectivos y proveerá las soluciones adecuadas a la problemática laboral de esas unidades productivas.

En suma, el título de este proyecto de ley dedicado a la materia del trabajo propende a introducir mayor seguridad jurídica en las relaciones laborales de la pequeña empresa, a racionalizar y hacer más previsibles sus costos laborales, promover la negociación colectiva a ese nivel y estimular la creación de nuevos puestos de trabajo y de esa forma contribuir a disminuir rápidamente la tasa de desempleo.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 84

CARLOS S. MENEM.

Domingo F. Cavallo. — José A. Caro Figuerroa. — Rodolfo C. Barra.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TÍTULO I

Disposiciones generales

Sección I

Objeto

Artículo 1º — La presente ley tiene por objeto promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas impulsando para ello políticas de alcance general a través de la creación de nuevos instrumentos de apoyo y la consolidación de los ya existentes.

Sección II

Definición de PYMES

Art. 2º — Encomiéndase a la autoridad de aplicación definir las características de las empresas que serán consideradas PYMES, teniendo en cuenta las peculiaridades de los diversos sectores de la economía en que se desempeñan sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83.

Sección III

Instrumentos

Art. 3º — Se facilitará el acceso de la pequeña y mediana empresa al crédito, estableciéndose entre otras facilidades, bonificaciones de la tasa de interés, ya sea mediante la creación de nuevos instrumentos o a través de la continuidad de los ya existentes.

Art. 4º — La bonificación, a la que se refiere el artículo anterior, será solventada por el Estado nacional y estará especialmente destinada a:

- a) Créditos para la adquisición de bienes de capital propios de la actividad de la empresa;
- b) Créditos para la constitución de capital de trabajo;
- c) Créditos para la reconversión y aumento de la productividad debiendo además contemplar amplios plazos de amortización y tasas comparables a las más bajas de plaza;
- d) Créditos para la actualización y modernización tecnológica, de procedimientos administrativos, gerenciales, organizativos y comerciales, y contratación de servicios de consultoría, etcétera;
- e) Créditos para financiar las exportaciones de los bienes producidos por las PYMES.

Art. 5º — El presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional preverá anualmente los fondos necesarios para hacer frente a los compromisos asumidos de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 3º y 4º.

Art. 6º — A los efectos de cumplimentar lo dispuesto en los artículos 13, 15 y 16 de la presente ley, el Estado nacional a través de la autoridad de aplicación, creará un fondo de garantía cuyo objeto específico será facilitar el acceso al crédito a las empresas comprendidas en los programas a los que se refieren los citados artículos.

Art. 7º — El Banco de la Nación Argentina y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán líneas especiales para la financiación de las pequeñas y medianas empresas.

Para tal fin, recurrirán especialmente a la utilización de fondos provenientes de instituciones multilaterales de crédito o de otras fuentes de origen externo.

En ningún caso las condiciones de estos créditos podrán resultar menos ventajosas para las pequeñas y medianas empresas que las que rijan para los que con igual destino, se detallan en el artículo 4º de la presente.

Art. 8º — El Poder Ejecutivo estimulará a través de los diversos medios a su alcance la constitución en el ámbito privado de sociedades conocidas como calificadoras de riesgo, especializadas en evaluar el desempeño, la solidez y el riesgo crediticio de las pequeñas y medianas empresas con el objeto de facilitar su operatoria financiera y comercial.

Art. 9º — Con el fin de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la utilización de los múltiples recursos que ofrece el mercado de capitales, tales como la emisión de obligaciones negociables, el Poder Ejecutivo, a través de los organismos pertinentes, dictará las normas que resulten necesarias para agilizar y simplificar ese acceso y las conducentes a disminuir en todo lo posible los costos implícitos en esas operatorias.

Art. 10. — Los bancos oficiales pondrán en juego todos los mecanismos a su alcance para potenciar la capacidad del mercado de capitales de concurrir en apoyo de las pequeñas y medianas empresas con instrumentos financieros genuinos, transparentes y eficaces; entre otros, la emisión de cédulas hipotecarias.

Art. 11. — Déjase establecido que los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME), originados en las disposiciones de los artículos 2º de la ley 21.542 y 11 de la ley 23.020, serán destinados durante el año fiscal 1995 a atender los gastos que demandan la implementación de los nuevos instrumentos creados en virtud de la presente o la ampliación de los ya existentes.

Art. 12. — Créase un Sistema Único Integrado de Información y Asesoramiento para las Pequeñas y Medianas Empresas. Al mismo se incorporarán todas las áreas del sector público, las que deberán aportar toda la información de que dispongan y que, a juicio de la autoridad de aplicación, resulte de interés para el accionar de las PYMES. Se invitará al sector privado a realizar el Sistema Único Integrado los aportes de información de sus respectivas áreas que estime convenientes.

Asimismo, la autoridad de aplicación tomará los recaudos necesarios con el fin de asegurar la adecuada co-

bertura de todo el territorio nacional y que el asesoramiento y la información sean integrales, atendiendo a cuestiones tan diversas como las tecnológicas, las organizativas, las contables, las financieras, y a todo otro aspecto esencial para aumentar la productividad de las PYMES.

Art. 13. — Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo anterior, sin perjuicio de las iniciativas que pudieran generarse como consecuencia de las disposiciones de la presente, el Estado nacional, con la concurrencia de los estados provinciales cuando así correspondiera, fortalecerá y coordinará el accionar de los organismos y programas ya existentes - Centro de Información y Estadística Industrial y sus centros de Información PYMES (CIPS); Fundaciones Exportar e Invertir; Ventanilla PYME; Programa Cambio Rural; y Sistema de Fortalecimiento de las Estructuras de Apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

Art. 14. — Con idéntico propósito encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional a movilizar, racionalizar y fortalecer tanto los cursos de acción como los recursos de los Institutos Nacionales de Tecnología Agropecuaria (INTA), de Tecnología Industrial (INTI) y de Tecnología Minera (Intemin) y de los restantes centros e institutos de investigación y de capacitación y formación de recursos humanos bajo su dependencia, cuyas actividades guarden relación con el accionar de las PYMES.

Art. 15. — Consolidar y extender los polos productivos en el interior del país para facilitar la convergencia de esfuerzos entre instituciones públicas, privadas y empresas de manera de mejorar la competitividad de las PYMES ubicadas en las economías regionales y sus posibilidades de inserción en el mercado internacional.

Art. 16. — El Estado nacional priorizará la profundización, ampliación y difusión del Programa de Desarrollo de Proveedores de manera de tender a optimizar la vinculación entre las empresas PYMES proveedoras y las grandes empresas.

Art. 17. — El Estado nacional tomará los recaudos necesarios para que el Programa al que se refiere el artículo anterior incorpore, paulatinamente, a sus propios proveedores PYMES.

Art. 18. — Encomiéndase al Poder Ejecutivo diseñar y poner en práctica medidas que incentiven y contribuyan a que las pequeñas y medianas empresas produzcan dentro de los más altos estándares internacionales de calidad.

Entre otras, propiciará su incorporación progresiva al Sistema Nacional de Certificación de Calidad estableciendo, por la vía reglamentaria, plazos adecuados pero ciertos para la incorporación de sus proveedores PYMES al mismo y a su vez invitando a los estados provinciales a adoptar medidas similares.

Art. 19. — La autoridad de aplicación promoverá la formación de consorcios de empresas PYMES con particular énfasis en aquellos vinculados con la exportación, de forma tal de orientarlos hacia el aprovechamiento de

las ventajas de localización adecuada, economías de escala, masa crítica de oferta, etcétera, que caracteriza a este tipo de asociaciones.

Para el cumplimiento de este fin, anualmente se presupuestarán recursos con destino a la complementación de parte de los gastos que demanden la formación y puesta en marcha de estos consorcios.

Art. 20. — Se establecerán, a través de los organismos competentes, políticas específicas de apoyo a la internacionalización comercial de las PYMES con particular acento en su proceso de inserción en los mercados de la región.

Art. 21. — Se diseñarán y desarrollarán instrumentos que induzcan y faciliten el proceso de especialización de las empresas pequeñas y medianas, de forma tal de incrementar su competitividad y en consecuencia su acceso a los mercados externos a partir del Mercosur.

Se deberán privilegiar aquellas herramientas que potencien la proyección exportadora de las PYMES, esto es el diseño, la calidad y la promoción del producto, la financiación de las exportaciones, etcétera.

Art. 22. — El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, con el concurso de las áreas de gobierno que resulten pertinentes, desarrollará un programa nacional de capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las pequeñas y medianas empresas.

El mismo tendrá como principales objetivos mejorar la capacidad de gerenciamiento y el conocimiento de los mercados, inducir conductas que den adecuadas respuestas frente a la constante evolución de los mismos y estimulen un crecimiento sostenido de la productividad de las PYMES.

Con el objeto de adecuar los contenidos de la capacitación a las necesidades concretas de los empresarios PYMES, se estimulará la participación y el asesoramiento de las entidades gremiales empresarias en el citado programa nacional de capacitación.

Art. 23. — El Estado nacional continuará instrumentando y desarrollando herramientas crediticias y de capacitación específicamente destinadas a las microempresas.

Art. 24. — Arbitrar los medios que promuevan la reconversión de las PYMES en consonancia con la preservación del medio ambiente y los estándares internacionales que rijan en la materia, estimulando la utilización de tecnologías limpias compatibles con un desarrollo sostenible.

Art. 25. — La autoridad de aplicación queda facultada para entender y proponer toda modificación a procedimientos administrativos previstos en cualquier norma legal, siempre que por ese medio se logren para la PYME efectivas reducciones de los tiempos y costos de gestión.

Art. 26. — Facúltase a la autoridad de aplicación para fijar políticas y dictar normas de lealtad comercial y defensa de la competencia con aplicación específica a las relaciones de las PYMES con las grandes empresas, sean éstas sus clientes o proveedores, las que deberán prever la intervención del organismo competente en ca-

sos de atraso injustificado o descuentos indebidos en pagos, ya fuere por provisión de bienes o contratación de servicios.

Art. 27. — La autoridad de aplicación creará un registro de empresas PYMES por rama de actividad, el que tendrá como finalidad contar con información actualizada sobre la composición y características de los diversos sectores PYMES, que permita el diseño de políticas e instrumentos adecuados para el apoyo a estas empresas.

Art. 28. — El Poder Ejecutivo elevará todos los años al Honorable Congreso de la Nación en la Ley de Presupuesto, una propuesta donde se prevea un porcentaje mínimo de las compras del Estado nacional, las que, siempre y cuando exista oferta adecuada, habrán de ser contratadas con pequeñas y medianas empresas.

Art. 29. — Al solo efecto de atender a lo dispuesto en el artículo 11 de la presente ley, transfírense los fondos provenientes de la liquidación de la Corporación para el Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa (COPYME), ley 21.542 y ley 23.020, a la autoridad de aplicación de la presente ley.

Sección IV

Autoridad de aplicación

Art. 30. — El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos será la autoridad de aplicación del presente título.

Sección V

De forma

Art. 31. — Derógase la ley 23.020/82 y toda otra ley y/o norma en lo que se oponga a la presente.

TITULO II

Sociedades de garantía recíproca

Sección I

De las características y constitución

Art. 32. — *Caracterización.* Créanse las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con el carácter de sociedades anónimas y con el objeto de facilitar a las pequeñas y medianas empresas el acceso al crédito.

Art. 33. — *Objeto.* El objeto social principal de las sociedades de garantía recíproca será el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos regulados en la presente ley.

Podrán asimismo brindar asesoramiento técnico, económico y financiero a sus socios en forma directa o a través de terceros contratados a tal fin.

Art. 34. — *Límite operativo.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) no podrán asignar a un mismo titular o grupo económico garantías superiores al cinco por ciento (5 %) del total garantizado por cada SGR.

Art. 35. — *Operaciones prohibidas.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) no podrán conceder directamente ninguna clase de créditos a sus socios ni realizar actividades distintas a las de su objeto social.

Art. 36. — *Denominación.* La denominación social deberá contener la indicación "Sociedades de Garantía Recíproca", su abreviatura o las siglas SGR.

Art. 37. — *Tipos de socios.* La Sociedad de Garantía Recíproca estará constituida por socios partícipes y socios protectores.

Serán socios partícipes únicamente las pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones generales que determine la autoridad de aplicación.

A los efectos de su constitución y durante los primeros cinco (5) años, toda SGR habrá de contar con un mínimo de doscientos (200) socios partícipes. Autorízase al Poder Ejecutivo a modificar estos mínimos en función de las peculiaridades regionales.

Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, que realicen aportes al capital social y al fondo de riesgo. La sociedad no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores.

Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.

Art. 38. — *Derechos de los socios partícipes.* Los socios partícipes tendrán los siguientes derechos además de los que les corresponden según la ley 19.550 y sus modificaciones:

1. Recibir los servicios determinados en su objeto social cuando se cumplieren las condiciones exigidas para ello.
2. Solicitar el reembolso de las acciones en las condiciones que se establecen en el artículo 47.

Art. 39. — *Derechos de los socios protectores.* Los socios protectores tendrán los derechos que les corresponden según la ley 19.550 y sus modificaciones.

Art. 40. — *Exclusión de socios.* El socio excluido sólo podrá exigir el reembolso de las acciones conforme al procedimiento y con las limitaciones establecidas en el artículo 47.

Art. 41. — *De la constitución.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se constituirán por acto único mediante instrumento público que deberá contener, además de los requisitos exigidos por la ley 19.550 y sus modificatorias, los siguientes:

1. Clave única de identificación tributaria de los socios partícipes y protectores fundadores.
2. Delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico que sirva para la determinación de quienes pueden ser socios partícipes en la sociedad.
3. Criterios a seguir para la admisión de nuevos socios partícipes y protectores y las condiciones a contemplar para la emisión de nuevas acciones.
4. Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración.
5. Condiciones y procedimientos para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes.

Art. 42. — *Autorización para su funcionamiento.* Una vez inscrita la sociedad anónima en el Registro Público de Comercio de acuerdo con la normativa vigente, la autorización para funcionar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) será otorgada por la autoridad de aplicación.

Art. 43. — *Revocación de la autorización para su funcionamiento.* La autoridad de aplicación podrá revocar la autorización para funcionar a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) por sí o a sugerencia del Banco Central de la República Argentina, cuando no cumplan con los requisitos y/o las disposiciones establecidos en la presente ley.

Art. 44. — *Modificación de los estatutos.* Será nula toda modificación a los estatutos de la sociedad que no cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que el consejo de administración o socios que realizan la propuesta, formulen un informe por escrito justificando la necesidad de modificación de los estatutos.
2. En la convocatoria a asamblea general, deberá detallarse claramente la modificación que se propone.
3. En la misma convocatoria se hará constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio legal el texto íntegro de la reforma propuesta y su justificación, pudiendo suplirse por la entrega o envío gratuito de dichos documentos, con acuse de recibo.
4. Se requerirá la aprobación de la propuesta de modificación por parte de la autoridad de aplicación.
5. Otorgada la autorización y aprobada en asamblea general, se procederá a la inscripción del mismo.

Sección II

Del capital social, fondo de riesgo y beneficios

Art. 45. — *Capital social.* El capital social de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) estará integrado por los aportes de los socios y representado por acciones ordinarias nominativas de igual valor.

El capital social mínimo será fijado por vía reglamentaria y podrá variar sin requerir modificación del estatuto, entre dicha cifra y un máximo que represente el quintuplo de la misma.

La participación de los socios protectores no podrá exceder, en conjunto, del cuarenta y nueve por ciento (49 %) del capital social. La participación de cada socio partícipe no podrá superar el cinco por ciento (5 %) del mismo.

Art. 46. — *Fondo de riesgo.* La Sociedad de Garantía Recíproca deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio.

Dicho fondo de riesgo estará constituido por:

1. Las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por la asamblea general.
2. Las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiere.
3. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumido a favor de sus socios.
4. El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos.
5. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en las colocaciones en que fuera constituido.

Art. 47. — *Derecho al reembolso de las acciones.* Todo socio partícipe podrá exigir el reembolso de sus acciones ante el consejo de administración siempre y cuando haya cancelado totalmente los contratos de garantía recíproca que hubiera celebrado, y en tanto dicho reembolso no implique reducción del capital social mínimo y respete lo establecido en el artículo 37. Tampoco procederá cuando la sociedad de garantía recíproca estuviera en trámite de fusión, escisión o disolución.

Para ello tendrá que solicitarlo con una antelación mínima de tres (3) meses salvo que los estatutos contemplen un plazo mayor que no podrá superar el de un (1) año. El monto a reembolsar no podrá exceder del valor de las acciones integradas. No deberán computarse a los efectos de la determinación del mismo, las reservas de la sociedad sobre las que los socios no tienen derecho alguno. El socio reembolsado responderá hasta dicho monto por las deudas contraídas por la sociedad con anterioridad a la fecha en que se produjo el reintegro por un plazo de cinco (5) años cuando el patrimonio de la sociedad sea insuficiente para afrontar las mismas.

En caso que el reembolso de capital de socios partícipes, altere la relación de participación relativa de estos y los socios protectores, la SGR les reembolsará a estos últimos la misma proporción del retiro de capital efectuado por los socios partícipes, a efectos de mantener inalterable la relación básica del cincuenta y uno por ciento (51 %) para socios partícipes y cuarenta y nueve por ciento (49 %) para socios protectores en la composición del capital social.

Art. 48. — *Privilegios.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) tendrán privilegio ante todo otro acreedor sobre las acciones de sus socios en relación a las obligaciones derivadas de los contratos de garantía recíproca vigentes. Las acciones de los socios partícipes no pueden ser objeto de gravámenes reales.

Art. 49. — *Cesión de las acciones.* Para la cesión se requerirá la autorización previa del consejo de administración y éste la concederá cuando los cesionarios acrediten reunir los requisitos establecidos en los estatutos y asuman las obligaciones que el cedente mantenga con la sociedad de garantía recíproca.

Art. 50. — *Aporte de capital.* Los aportes deberán ser integrados en efectivo, como mínimo en un cincuenta por ciento (50 %) al momento de la suscripción. El

remanente deberá ser integrado, también en efectivo en el plazo máximo de un (1) año a contar de esa fecha. La integración total será condición necesaria para que el socio partícipe pueda contratar garantías recíprocas.

Art. 51. — *Aumento del capital social.* El capital fijado por los estatutos podrá ser aumentado por decisión de la asamblea general ordinaria hasta el quintuplo de dicho monto. Cuando el incremento del capital social esté originado por la capitalización de utilidades, las acciones generadas por dicho incremento se distribuirán entre los socios en proporción a sus respectivas tenencias.

En caso de tratarse de emisión de nuevas acciones, la integración de los aportes se realizará conforme a lo establecido en el artículo 50.

Todo aumento de capital que exceda el quintuplo del fijado estatutariamente deberá contar con la aprobación de los dos tercios de los votos totales de la asamblea general extraordinaria.

Art. 52. — *Reducción del capital por pérdidas.* Los socios deberán compensar con nuevos aportes cualquier pérdida que afecte al monto del capital fijado estatutariamente o que exceda del treinta y cinco por ciento (35 %) de las ampliaciones posteriores, en las condiciones fijadas en el artículo 50.

Art. 53. — *Distribución de los beneficios.* Serán considerados beneficios a distribuir las utilidades líquidas y realizadas obtenidas por la sociedad en el desarrollo de la actividad que hace a su objeto social.

Dichos beneficios serán distribuidos de la siguiente forma:

1. A reserva legal: cinco por ciento (5 %) anual hasta completar el veinte por ciento (20 %) del capital social.
2. El resto tendrá el siguiente tratamiento:
 - a) La parte correspondiente a los socios protectores podrá ser abonada en efectivo, como retribución al capital aportado;
 - b) La parte correspondiente a los socios partícipes se destinará al fondo de riesgo en un cincuenta por ciento (50 %), pudiendo repartirse el resto entre la totalidad de dichos socios.

En todos los casos en que proceda la distribución de los beneficios en efectivo a que se refiere este artículo, tanto los socios protectores como los socios partícipes deberán, para tener derecho a percibirlo, haber integrado la totalidad del capital social suscrito y no encontrarse, por ningún motivo en mora con la sociedad.

Sección III

De los órganos sociales

Art. 54. — *Organos sociales.* Los órganos sociales de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), serán la asamblea general, el consejo de administración y la sin-

dicatura, y tendrán las atribuciones que establece la ley 19.550 para los órganos equivalentes de las sociedades anónimas, salvo en lo que resulte modificado por esta ley.

Art. 55. — *De la asamblea general ordinaria.* La asamblea general ordinaria estará integrada por todos los socios de la sociedad de garantía recíproca y se reunirá por lo menos dos (2) veces al año o cuando, dentro de los términos que disponga la presente ley, sea convocada por el consejo de administración.

Serán de su competencia los siguientes asuntos:

1. Fijar la política de inversión de los fondos sociales.
2. Aprobar el costo de las garantías, el mínimo de contragarantías que la SGR habrá de requerir al socio partícipe y fijar el límite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el consejo de administración.

Art. 56. — *De la asamblea general extraordinaria.* Serán de competencia de la asamblea general extraordinaria todas aquellas cuestiones previstas en la ley 19.550 y sus modificatorias y que no estuvieran reservadas a la asamblea general ordinaria.

Art. 57. — *Convocatoria de las asambleas generales.* La asamblea general ordinaria deberá ser convocada por el consejo de administración, mediante anuncio publicado durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad, con quince (15) días de anticipación, como mínimo, a la fecha fijada para su celebración. En el anuncio deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar, orden del día y recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas.

La asamblea general extraordinaria será convocada por el consejo de administración o cuando lo solicite un número de socios que representen como mínimo el diez por ciento (10 %) del capital social. En la convocatoria, deberá expresarse la fecha de la primera y segunda convocatoria, hora, lugar de reunión y el orden del día en el que deberán incluirse los asuntos solicitados por los socios convocantes y los recaudos especiales exigidos por el estatuto para la concurrencia de los accionistas. La convocatoria será publicada como mínimo con una antelación de treinta (30) días y durante cinco (5) días en el Boletín Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación de la zona o provincia en la que tenga establecida su sede y domicilio la sociedad.

Art. 58. — *Quórum y mayoría.* Tratándose de la primera convocatoria, las asambleas generales quedarán constituidas con la presencia de más del cincuenta y uno por ciento (51 %) del total de los votos de la sociedad debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un veinte por ciento (20 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad. En la segunda convocatoria, las asambleas generales serán vá-

lidas con la presencia de por lo menos treinta por ciento (30 %) de la totalidad de los votos de la sociedad, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un quince por ciento (15 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.

Para decisión por asamblea de temas que involucren la modificación de los estatutos, la elección del consejo de administración, la fusión, escisión o disolución de la sociedad, se requerirá una mayoría del sesenta por ciento (60 %) de los votos sobre la totalidad del capital social, debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo un treinta por ciento (30 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad. Para el resto de las decisiones se requerirá la mayoría simple de los votos presentes, salvo que los estatutos requieran otro tipo de mayoría. En todos los casos las mayorías deberán incluir como mínimo un quince por ciento (15 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.

Art. 59. — *Representación en la asamblea.* Cualquier socio podrá representar a otro de igual tipo en las asambleas generales mediante autorización por escrito para cada asamblea. Sin embargo, un mismo socio no podrá representar a más de diez (10) socios ni ostentar un número de votos superior al diez por ciento (10 %) del total.

Art. 60. — *Nulidad de voto.* Será considerado nulo aquel voto emitido por un socio cuando el asunto tratado involucre una decisión que se refiera a la posibilidad de que la sociedad pueda hacer valer un derecho en contra de él o existiera entre ambos un interés contrapuesto o en competencia. Sin embargo, su presencia será considerada para el cálculo del quórum y de la mayoría.

Art. 61. — *Consejo de administración.* El consejo de administración estará integrado por tres (3) personas, de las cuales dos (2) representarán a los socios partícipes y una (1) representará a los socios protectores y tendrá por función principal la administración y representación de la sociedad.

El consejo de administración será presidido por uno de los dos representantes de los socios partícipes.

Los miembros del consejo de administración deberán ser previamente autorizados por la autoridad de aplicación para ejercer dichas funciones.

Art. 62. — *Competencia del consejo de administración.* Será competencia del consejo de administración decidir sobre los siguientes asuntos:

1. El reembolso de las acciones existentes manteniendo los requisitos mínimos de solvencia.
2. Cuando las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) se hubiesen visto obligadas a pagar en virtud de la garantía otorgada a favor de un socio por incumplimiento de éste, el consejo de administración dispondrá la exclusión del socio. También podrá proceder de la misma forma cuando no se haya realizado la integración del capital de acuerdo con lo establecido en la presente ley y los estatutos sociales.

3. Decidir sobre la admisión de nuevos socios conforme a lo establecido en los estatutos de la sociedad, ad referendum de la asamblea ordinaria.
4. Nombrar sus gerentes.
5. Fijar las normas con las que se regulará el funcionamiento del consejo de administración y realizar todos los actos necesarios para el logro del objeto social.
6. Proponer a la asamblea general ordinaria la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.
7. Proponer a la asamblea el costo que los socios partícipes deberán oblar para acceder al otorgamiento de garantías.
8. Otorgar o denegar garantías y/o bonificaciones a los socios partícipes estableciendo en cada caso las condiciones especiales que tendrá que cumplir el socio para obtener la garantía y fijar las normas y procedimientos aplicables para las contragarantías a que se refiere el artículo 71.
9. Determinar las inversiones a realizar con el patrimonio de la sociedad en el marco de las pautas fijadas por la asamblea.
10. Autorizar las transmisiones de las acciones conforme a lo establecido en la presente ley.
11. Someter a la aprobación de la asamblea general ordinaria el balance general y estado de resultados y proponer la aplicación de los resultados del ejercicio.
12. Realizar cualesquiera otros actos y acuerdos que no estén expresamente reservados a la asamblea por las disposiciones de la presente ley o los estatutos de la sociedad.

Art. 63. — *Sindicatura.* Las Sociedades de Garantía Recíproca tendrán un órgano de fiscalización o sindicatura integrado por tres (3) síndicos designados por la asamblea general ordinaria.

Art. 64. — *Requisitos para ser síndico.* Para ser síndico se requerirá:

1. Ser abogado, licenciado en economía, licenciado en administración de empresas o contador público con título habilitante.
2. Tener domicilio real en la misma jurisdicción de la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

Art. 65. — *Atribuciones y deberes.* Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 19.550 y sus modificatorias, son atribuciones y deberes de la Sindicatura los siguientes:

1. Verificar en igual forma y periodicidad las inversiones, los contratos de garantías celebrados y el estado del capital social, las reservas y el fondo de riesgo.
2. Atender los requerimientos y aclaraciones que formule la autoridad de aplicación y el Banco Central de la República Argentina.

Sección IV

De la fusión, escisión y disolución

Art. 66. — *Fusión y escisión.* La Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) sólo podrán fusionarse entre sí o escindirse en dos (2) o más sociedades de la misma naturaleza, previa aprobación de la asamblea general con las mayorías previstas en el artículo 58 de la presente ley y autorización de la autoridad de aplicación con los requisitos previstos en esta ley para su constitución.

El canje de las acciones de la sociedad o sociedades originales, por las correspondientes a la o las sociedades nuevas, se realizará sobre el valor real de las mismas. Cuando de resultados de esta forma de cálculo quedaren pendientes fracciones de acciones no susceptibles de ser canjeadas, se abonará en efectivo el valor correspondiente, salvo que existieran contratos de garantía recíproca vigentes, en cuyo caso el pago se realizará una vez extinguidos los mismos.

Art. 67. — *Disolución.* La disolución de una sociedad de garantía recíproca se verificará, además de las causales fijadas por la ley 19.550 y sus modificatorias, por las siguientes:

1. Por la imposibilidad de absorber pérdidas que representen el total del fondo de riesgo, el total de la reserva legal y el cuarenta por ciento (40 %) del capital.
2. Por disminución del capital social a un monto menor al mínimo determinado por vía reglamentaria durante un período mayor a tres (3) meses.
3. Por revocación de la autorización acordada por la autoridad de aplicación.

Sección V

Del contrato, la garantía y la contragarantía

Art. 68. — *Contrato de garantía recíproca.* Habrá contrato de garantía recíproca cuando una sociedad de garantía recíproca constituida de acuerdo con las disposiciones de la presente ley se obligue accesoriamente por un socio partícipe que integra la misma y el acreedor de éste acepte la obligación accesorias.

El socio partícipe queda obligado frente a la SGR por los pagos que ésta afronte en cumplimiento de la garantía.

Art. 69. — *Objeto de la obligación principal.* El contrato de garantía recíproca tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por el socio partícipe para el desarrollo de su actividad económica u objeto social.

Dicho aseguramiento puede serlo por el total de la obligación principal o por menor importe.

Art. 70. — *Carácter de la garantía.* Las garantías otorgadas conforme al artículo 68 serán en todos los casos por una suma fija y determinada, aunque el crédito de la obligación a la que acceda fuera futuro,

incierto o indeterminado. El instrumento del contrato será título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus intereses y gastos, justificado conforme al procedimiento del artículo 793 del Código de Comercio y hasta el importe de la garantía. La garantía recíproca es irrevocable.

Art. 71. — *De la contragarantía.* Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) deberán requerir contragarantías por parte de los socios partícipes en respaldo de los contratos de garantías con ellos celebrados.

El socio partícipe tomador del contrato de garantía recíproca deberá ofrecer a la SGR algún tipo de contragarantía en respaldo de su operación.

Art. 72. — *Formas de contrato.* El contrato de garantía recíproca es consensual. Se celebrará por escrito, pudiendo serlo por instrumento público o privado con firmas certificadas por escribano público.

Sección VI

De los efectos del contrato entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el acreedor

Art. 73. — *Solidaridad.* La Sociedad de Garantía Recíproca responderá solidariamente por el monto de las garantías otorgadas con el deudor principal que afianza, sin derecho a los beneficios de división y exención de bienes.

Sección VII

De los efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y los socios

Art. 74. — *Efectos entre la Sociedad de Garantía Recíproca y el socio.* La Sociedad de Garantía Recíproca podrá trabar todo tipo de medidas cautelares contra los bienes del socio partícipe —deudor principal— en los siguientes casos:

- a) Cuando fuese intimado al pago;
- b) Si vencida la deuda el deudor no la abonara;
- c) Si disminuyen el patrimonio del deudor, o utilizare sus bienes para afianzar nuevas obligaciones sin consentimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca;
- d) Si el deudor principal quisiera ausentarse del país y no dejare bienes suficientes y libres de todo gravamen para cancelar sus obligaciones;
- e) Cuando el deudor principal incumpliere obligaciones societarias respecto de la Sociedad de Garantía Recíproca;
- f) Cuando el deudor principal fuera una persona de existencia ideal y no diera cumplimiento a las obligaciones legales para su funcionamiento regular.

Art. 75. — *Quiebra del socio.* Si el socio quebrase antes de cancelar la deuda garantizada, la Sociedad de Garantía Recíproca tiene derecho de ser admitida previamente en el pasivo de la masa concursada.

Art. 76. — *Subrogación de derechos.* La Sociedad de Garantía Recíproca que cancela la deuda de sus socios sólo se subrogará en los derechos, acciones y privilegios del acreedor resarcido en la medida que fuera necesario para el recupero de los importes abonados.

Art. 77. — *Repetición.* Si la Sociedad de Garantía Recíproca ha afianzado una obligación solidaria de varios socios, podrá repetir de cada uno de ellos el total de lo que hubiese pagado.

Sección VIII

De la extinción del contrato de garantía recíproca

Art. 78. — *Extinción del contrato de garantía recíproca.* El contrato de garantía recíproca se extingue por

- a) La extinción de la obligación principal;
- b) Modificación o novación de la obligación principal sin intervención y consentimiento de la Sociedad de Garantía Recíproca;
- c) Las causas de extinción de las obligaciones en general y las obligaciones accesorias en particular.

Sección IX

Beneficios impositivos y Banco Central

Art. 79. — *Beneficios impositivos.* Los contratos de garantía recíproca instituidos mediante este régimen, gozarán del mismo tratamiento impositivo que las exenciones previstas en el artículo 20 de la ley 20.628 (t.o. 1988) y en la ley 23.349, ambas con sus modificaciones pertinentes.

Los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo de los socios protectores y partícipes serán deducibles de las utilidades imponibles en sus respectivas actividades.

Art. 80. — *Banco Central.* En la esfera de su competencia, el Banco Central de la República Argentina dispondrá las medidas conducentes a promover la aceptación de las garantías concedidas por las sociedades de que trata el presente régimen por parte de las entidades financieras que integran el sistema institucionalizado, otorgándoles a las mismas carácter de garantías preferidas autoliquidables, en tanto reúnan los requisitos necesarios.

Asimismo el Banco Central de la República Argentina ejercerá las funciones de superintendencia en lo atinente a las vinculaciones de las SGR con los bancos y demás entidades financieras.

Sección X

Autoridad de aplicación

Art. 81. — *Autoridad de aplicación.* El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación será la autoridad de aplicación del presente título

de esta ley. En tal carácter, dictará las normas reglamentarias que fueran menester para su cumplimiento y ejercerá la fiscalización y supervisión de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), con excepción de lo dispuesto en el artículo 80.

Sección XI

Disposiciones finales

Art. 82. — *Ley 19.550.* Todas aquellas cuestiones no consideradas específicamente en el título II de la presente ley se regirán por la Ley de Sociedades Comerciales, 19.550, y sus modificaciones.

TÍTULO III

Relaciones de trabajo

Sección I

Definición de pequeña empresa

Art. 83. — El contrato de trabajo y las relaciones laborales en la pequeña empresa (PE) se regirán por el régimen especial de la presente ley.

A los efectos de este capítulo, pequeña empresa es aquella que reúna las dos condiciones siguientes:

- a) Su plantel no supere los cuarenta (40) trabajadores;
- b) Tenga una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad o sector fije la Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104 de esta ley.

Para las empresas que a la fecha de vigencia de esta ley vinieran funcionando, el cómputo de trabajadores se realizará sobre el plantel existente al 1° de enero de 1995.

La negociación colectiva de ámbito superior al de empresa podrá modificar la condición referida al número de trabajadores definida en el segundo párrafo punto a) de este artículo.

Las pequeñas empresas que superen alguna o ambas condiciones anteriores podrán permanecer en el régimen especial de esta ley por un plazo de tres (3) años, siempre y cuando no dupliquen el plantel o la facturación indicados en el párrafo segundo de este artículo.

Sección II

Registro único de personal

Art. 84. — Las empresas comprendidas en la presente ley podrán sustituir los libros y registros exigidos por las normas legales y convencionales vigentes por un registro denominado "Registro Único de Personal".

Art. 85. — En el Registro Único de Personal se anotará la totalidad de los trabajadores, cualquiera sea su modalidad de contratación y será rubricado por la autoridad administrativa laboral competente.

Art. 86. — En el Registro Único de Personal quedarán unificados los libros, registros, planillas y demás elementos de contralor que se señalan a continuación:

- a) El libro especial del artículo 52 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado en 1976);
- b) La sección especial establecida en el artículo 13 del decreto 342/92;
- c) Los libros establecidos por la ley 12.713 y su decreto reglamentario 118.755/42 de trabajadores a domicilio;
- d) El libro especial del artículo 122 del Régimen Nacional de Trabajo Agrario de la ley 22.248.

Art. 87. — En el Registro Único de Personal se hará constar el nombre y apellido o razón social del empleador, su domicilio y número de CUIT y además se consignarán los siguientes datos:

- a) Nombre y apellido del trabajador y su documento de identidad;
- b) Número de CUIL;
- c) Domicilio del trabajador;
- d) Estado civil e individualización de sus cargas de familia;
- e) Fecha de ingreso;
- f) Tarea a desempeñar;
- g) Modalidad de contratación;
- h) Lugar de trabajo;
- i) Forma de determinación de la remuneración asignada, monto y fecha de su pago;
- j) Régimen previsional por el que haya optado el trabajador y, en su caso, individualización de su Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP);
- k) Toda modificación que se opere respecto de los datos consignados precedentemente y, en su caso, la fecha de egreso.

La autoridad de aplicación establecerá un sistema simplificado de denuncia individualizada de personal a los organismos de seguridad social.

Sección III

Modalidades de contratación

Art. 88. — Las pequeñas empresas podrán hacer uso de las modalidades de contratación promovidas, previstas en los artículos 43 a 65 de la Ley Nacional de Empleo, 24.013, bajo las siguientes condiciones:

- a) No requerirán la previa habilitación por convenio colectivo de trabajo a que se refiere el artículo 30 de la Ley Nacional de Empleo;
- b) No se requerirá el registro del contrato previsto en el artículo 18 inciso b) y 31 de la Ley Nacional de Empleo;

c) No regirá la indemnización prevista en el artículo 38 de la Ley Nacional de Empleo.

Sección IV

Disponibilidad colectiva

Art. 89. — Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán modificar en cualquier sentido las formalidades, requisitos, aviso y oportunidad de goce de la licencia anual ordinaria.

No podrán ser materia de disponibilidad convencional lo dispuesto en el último párrafo del artículo 154 del Régimen de Contrato de Trabajo (LCT, texto ordenado 1976).

Art. 90. — Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán disponer el fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo anual complementario siempre que no excedan de tres (3) períodos en el año.

Art. 91. — Los convenios colectivos de trabajo referidos a las pequeñas empresas podrán modificar el régimen de extinción del contrato de trabajo.

Para los casos en que dichos convenios introduzcan, en el régimen de extinción, cuentas de capitalización individual, el Poder Ejecutivo habilitará la utilización de los instrumentos de gestión previstos en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones, o en el régimen de seguros.

Art. 92. — Las resoluciones de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario referidas a la pequeña empresa y decididas por la votación unánime de las representaciones que la integran, podrán ejercer iguales disponibilidades a las previstas en los artículos 89 y 90 de esta ley con relación a iguales institutos regulados en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario por la ley 22.248.

Sección V

Movilidad interna

Art. 93. — El empleador podrá acordar con la representación sindical signataria del convenio colectivo la redefinición de los puestos de trabajo correspondientes a las categorías determinadas en los convenios colectivos de trabajo.

Sección VI

Preaviso

Art. 94. — En las pequeñas empresas el preaviso se computará a partir del día siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un (1) mes cualquiera fuere la antigüedad del trabajador.

Esta norma regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la presente ley.

Sección VII

Formación profesional

Art. 95. — La capacitación profesional es un derecho y un deber fundamental de los trabajadores de las pe-

queñas empresas, quienes tendrán acceso preferente a los programas de formación continua financiados con fondos públicos.

El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la pequeña empresa en la que preste servicios, podrá solicitar a su empleador la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de dichos cursos.

Los convenios colectivos para pequeñas empresas deberán contener un capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del derecho a la capacitación profesional.

Sección VIII

Mantenimiento y regulación del empleo

Art. 96. — Las pequeñas empresas, cuando decidan reestructurar sus plantas de personal por razones tecnológicas, organizativas o de mercado, podrán proponer a la asociación sindical respectiva la modificación de determinadas regulaciones colectivas o estatutarias aplicables.

La asociación sindical tiene derecho a recibir la información que sustente las pretensiones de las pequeñas empresas.

Si la pequeña empresa y la asociación sindical acordaran tal modificación, la pequeña empresa no podrá efectuar despidos por la misma causa durante el tiempo que dure la modificación.

Art. 97. — Cuando las extinciones de los contratos de trabajo hubieran tenido lugar con consecuencia de un procedimiento preventivo de crisis, el Fondo Nacional de Empleo podrá asumir total o parcialmente las indemnizaciones respectivas, o financiar acciones de capacitación y reconversión para los trabajadores despedidos.

Sección IX

Negociación colectiva

Art. 98. — La entidad sindical con personería gremial legitimada para negociar y la representación de la pequeña empresa podrán acordar convenios colectivos de trabajo para el ámbito de estas últimas.

La entidad sindical podrá delegar en entidades de grado inferior la referida negociación.

Podrán, asimismo estipular libremente la fecha de vencimiento de estos convenios colectivos que se extinguirán de pleno derecho, salvo pacto en contrario, a los tres (3) meses de su vencimiento.

Art. 99. — Vencido el término de un convenio colectivo de trabajo o sesenta (60) días antes de su vencimiento, cualquiera de las partes signatarias podrá solicitar el inicio de las negociaciones colectivas para el ámbito de la pequeña empresa. A tal fin el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá convocar a las partes.

Las partes están obligadas a negociar de buena fe. Este principio supone los siguientes derechos y obligaciones.

- a) Concurrencia a la negociación y a las audiencias;
- b) Intercambio de formación;
- c) Realización de esfuerzos conducentes para arribar a un acuerdo.

Art. 100. — En las actividades en las que no existiera un convenio colectivo de trabajo específico para las pequeñas empresas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá prever que en la constitución de la representación de los empleadores en la comisión negociadora se encuentre representado el sector de la pequeña empresa.

Art. 101. — A partir de los seis (6) meses de la entrada en vigencia de la presente ley, será requisito para la homologación por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que el convenio colectivo de trabajo contenga un capítulo específico que regule las relaciones laborales en la pequeña empresa, salvo que en la actividad de que se tratare se acreditara la existencia de un convenio colectivo específico para las pequeñas empresas.

Art. 102. — Los convenios colectivos de trabajo para pequeñas empresas, durante el plazo de su vigencia, no podrán ser afectados por convenios de otro ámbito.

Sección X

Salud y seguridad en el trabajo

Art. 103. — Las normas de salud y seguridad en el trabajo deberán considerar, en la determinación de exigencias, el número de trabajadores y riesgos existentes en cada actividad. Igualmente deberán fijar plazos que posibiliten la adaptación gradual de las PE a la legislación.

Sección XI

Seguimiento y aplicación

Art. 104. — Créase una Comisión Especial de Seguimiento encargada de:

- a) Evaluar el impacto del título III de esta ley sobre el empleo, el mercado de trabajo, y la negociación colectiva;
- b) Elaborar un informe anual acerca de la evolución de los tres factores del inciso anterior en el ámbito de la pequeña empresa;
- c) Determinar el monto de la facturación anual, a los efectos previstos en el artículo 83 de esta ley.

Esta comisión estará integrado por tres (3) representantes de la Confederación General del Trabajo, tres (3) representantes de las organizaciones de pequeños empleadores, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, que presidirá las deliberaciones.

La Comisión Especial de Seguimiento podrá, además:

- a) Intervenir como mediador voluntario en los conflictos que pudieran derivarse de la aplicación de este capítulo y que las partes interesadas decidieran someterle;
- b) Ser consultada por el ministro de Trabajo y Seguridad Social con carácter previo a la reglamentación del presente capítulo.

Art. 105. — El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, será la autoridad de aplicación del título III de la presente ley.

TÍTULO IV

Disposición final

Art. 106. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

CARLOS S. MENEM.

Domingo F. Cavallo. — José A. Caro Figueroa. — Rodolfo C. Barra.

SESIONES DE PRORROGA

1994

ATENCION CONSULTAS

Supl. (1) al ORDEN DEL DIA Nº 1216

SUMARIO: Observaciones formuladas al dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, contenido en el Orden del Día Nº 1.216. Machado. (66-D.O.-1994.)

Buenos Aires, 16 de febrero de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de formular observación al dictamen sobre el establecimiento de un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y la creación de las sociedades de garantía recíproca (86-P.E.-1994) publicado en el Orden del Día Nº 1.216, en virtud de que los legisladores de la Unión Cívica Radical de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara, realizaron importantes modificaciones al mismo, que no se incluyeron en dicho orden del día.

En efecto, y como lo expresa en el informe respectivo el correligionario diputado Alcides H. López, nuestra bancada, en la Comisión de Legislación del Trabajo, elaboró un proyecto alternativo centrándose en el título III, "Relaciones de trabajo", sobre el régimen para las PYMES.

Ello fue así porque no se le concedió a los legisladores de la UCR de las otras dos comisiones, el plazo mínimo para presentar nuestro dictamen terminado.

Por esa razón y en los términos del artículo 95, es que solicito que se incluya como observación el proyecto de ley D.-5.892-94 y que el mismo sea tomado como dictamen en minoría de las tres comisiones que le compete el tema.

Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.

Oscar A. Machado.

SESIONES DE PRORROGA

1994

Supl. (2) al ORDEN DEL DIA N° 1216

SUMARIO: Observaciones formuladas al dictamen de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, contenido en el Orden del Día N° 1.216. Estévez Boero. (67-D.O.-1994.)

Buenos Aires, 17 de febrero de 1995.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierri.

S/D.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Honorable Cámara, vengo a observar el dictamen publicado en el Orden del Día N° 1.216 de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, referente a pequeñas y medianas empresas (PYMES). Establecimiento de un régimen especial para las mismas y creación de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).

Sin perjuicio del derecho de ampliar en el recinto mi posición, a continuación señalo los fundamentos por los cuales manifiesto disconformidad con el referido dictamen, a efectos de que sean considerados por esta Honorable Cámara.

El proyecto es fundamentado en la necesidad de establecer un régimen especial para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que, en lo fundamental, atiende a los siguientes aspectos:

- Financiamiento.
- Información y asesoramiento
- Garantías estatales en determinados casos.
- Capacitación empresarial.
- Asignación de cuotas en compras del Estado.
- Sociedades de garantías recíprocas.
- Modificaciones en la legislación laboral.

Importancia de las PYMES

El gobierno plantea su reconocimiento a la importancia que revisten las PYMES en la economía y propone una serie de medidas entre las que se incluyen reclamos del sector que pueden ser rastreados en la literatura sobre PYMES de los últimos veinte años.

Pero el gobierno evita la consideración de las causas por las que se ha producido un evidente debilitamiento, que incluye desaparición de empresas, en el sector PYMES. De esta forma busca eludir que quede en evidencia la responsabilidad que le cabe en esta destrucción, en su carácter de diseñador y gestor de la política económica aplicada durante los últimos cinco años.

Al haber eliminado la acción del Estado como impulsor del desarrollo económico y haber jerarquizado a ultranza el funcionamiento de mercados imperfectos, caracterizados por el dominio de los grandes grupos económicos, han facilitado la concentración del capital en desmedro de las pequeñas y medianas empresas.

Las PYMES han sido desprotegidas durante los años de gestión de este gobierno y, aun más, han sido agredidas por políticas que las han dejado indefensas ante los grandes grupos económicos y ante el capital financiero.

El gobierno ha puesto el Estado al servicio de esos grandes grupos económicos y les ha transferido, a precio vil, la propiedad del ahorro nacional de varias generaciones de argentinos que se corporizaba en las empresas estatales de servicios públicos y en grandes obras de infraestructura.

Una de las consecuencias de esta política es la desprotección de las grandes mayorías de nuestra población, y una de las formas en que se expresa esta desprotección es en la caída del empleo y en su precarización. Al ser las PYMES las más importantes generadoras de puestos de trabajo, su crisis se traslada hacia los trabajadores.

La política de importaciones, que tiene por objeto presionar a la baja al índice de precios, conduce a la desaparición de la producción nacional. Al regalar el mercado interno a los productos de consumo elaborados en el exterior, por ejemplo alimentos, se condena a la desaparición de las producciones de las economías regionales y a las PYMES vinculadas a ellas. Esta es una realidad que logra bajar el índice de precios pero sacrifica empleo y salario de los trabajadores.

Las PYMES no le han interesado al gobierno desde que asumió hasta ahora. Si en este momento plantea una lavada reivindicación no es para beneficiarlas puesto que no cree en ellas, sino para justificar la aplicación de medidas que poco tienen que ver con las PYMES. Es necesario no disimular la realidad porque todos sabemos en el país que se le están quitando derechos a los sectores más necesitados con el único objeto, no de incrementar la ocupación —que se sabe inviable—, sino de enviar señales de humo al capital extranjero. Nosotros rechazamos la utilización del derecho del trabajo, que en nuestro país fundara Alfredo Palacios, como combustible.

Por ejemplo el gobierno, a regañadientes, intenta justificar la inclusión de algo que no está dispuesto a cumplir como es la asignación a las PYMES de una cuota en las compras del Estado.

Este equipo económico que ha destruido el "compre nacional" aduciendo que era incompatible con la

eficiencia productiva, hoy tiene que meter por la ventana lo que sacó por la puerta. Se trata de una reivindicación de los pequeños y medianos empresarios que el gobierno se ha visto obligado a incorporar al texto. Pero son tan evidentes las prevenciones contra este tema, que se manifiestan en frases tales como: "incluye la posibilidad..."; "...un porcentaje mínimo..."; "siempre y cuando exista oferta adecuada..."; que es digno de compasión el economista a quien se le encomendó la redacción de un texto tan contradictorio con el fundamentalismo de mercado que repiten cotidianamente.

Definición de PYMES

El proyecto tiene una trampa que se esconde detrás de la definición de PYME. Los títulos I y II hablan de PYMES, mientras que el título III habla de Pequeña Empresa (PE). El peligro reside en que lo que se legisla para PE pueda ser, de una forma u otra, aplicado a las empresas que se definan como PYMES. Y en el título III se plantean las modificaciones en la legislación laboral que implican el más serio retroceso en los derechos de los trabajadores en la historia de la legislación laboral argentina.

Se deja en manos del Ministerio de Economía la **definición de la que es una PYME** (artículos 2º y 3º), y con ello de qué empresas serán beneficiarias de las disposiciones de los títulos I y II.

Si tomamos en cuenta que el Ministerio de Economía considera PYMES a empresas con 200 y 300 empleados (resolución 401/94) tenemos una pauta que nos indica que empresas que no son pequeñas y medianas accederán a esos beneficios.

Por lo tanto, no existe la certeza de que las empresas beneficiadas sean realmente las pequeñas y medianas, y sí existe la sospecha fundada de que empresas que no son pequeñas y medianas terminen siendo las reales beneficiarias de estas medidas.

La caracterización de pequeña empresa (PE) queda sujeta a un máximo de 40 trabajadores, que se estira hasta 79 trabajadores por aplicación del último párrafo del artículo 83 y que se estira al infinito por aplicación del anteúltimo párrafo de dicho artículo. También se hace una mención a la facturación anual cuyo monto se fijará por sector. Esto y no decir nada es lo mismo.

Pero nada se plantea de la incidencia de la empresa en el mercado en que actúa, y esto es determinante para una caracterización correcta de lo que es una PYME o una PE. Independientemente de la cantidad de trabajadores y de su facturación es necesario definir que una PYME, para ser tal, no debe poseer incidencia determinante en los mercados en que actúa.

Bonificaciones en las tasas de interés

Los artículos 3º, 4º y 5º plantean bonificar las tasas de interés de los créditos para las PYMES. Dicha bonificación será solventada por el Estado nacional debiendo incluirse en el presupuesto nacional como

una partida anual, la cual, mientras no esté determinada, no deja de ser un enunciado sin realización.

La claudicación en lo que hace a la soberanía de la moneda (cosa que ningún país importante del mundo ha hecho), esa virtual entrega de la soberanía monetaria que ha producido el equipo económico, priva de herramientas económicas que permitan dirigir el crédito. Antes, cuando teníamos una moneda propia, eso se podía hacer.

La captación del ahorro de la sociedad y las jerarquías en su aplicación es algo que le pertenece, que le es propio, a la sociedad. De allí que sea legítimo que la sociedad a través de sus órganos estables tenga una activa participación en la dirección de los flujos financieros.

Pero la ideología del capitalismo salvaje, que prioriza la rentabilidad y no el bien de la comunidad, aplica el dogma de considerar que el mercado lo soluciona todo. Y de esta forma dejan en manos de los grandes grupos financieros la captación y la utilización del ahorro de la sociedad.

Peor cuando se encuentran los límites que impone la realidad, cuando las maniobras especulativas de los operadores privados concluyen en la quiebra de las instituciones financieras (y en el despojo de los ahorristas que hoy carecen de todo tipo de garantías) tiene que recurrir a la acción del Estado, que tanto denigra en su discurso, para atenuar los efectos de la crisis.

Prueba de ello es que cuando los efectos de la crisis mexicana se comenzaron a sentir en la Argentina se estremeció el plan de convertibilidad y tambalearon los bancos. ¿Cuál fue el planteo del equipo económico respecto de los bancos en dificultades? Fue un planteo liberal y dogmático, los propios bancos privados generarían una red de ayuda mutua. ¿Cuál fue el resultado? Que el Estado tuvo que intervenir, aportar recursos a través del Banco de la Nación, porque la red privada de solidaridad bancaria para lo único que sirvió fue para agravar el problema.

Hoy no existen instrumentos para la utilización del ahorro de la sociedad que son inherentes a la existencia de una moneda soberana. No existen las líneas de crédito que determinaba la autoridad monetaria a través de los resdescuentos, no existen las políticas financieras de fomento regional y sectorial, no existen jerarquías en la utilización del ahorro de la sociedad. Solamente existen los grandes grupos financieros y su manejo del mercado.

Por lo tanto la única política que puede aplicar este equipo económico respecto del crédito es subvencionar la tasa asignando la partida presupuestaria correspondiente.

Creación de un Fondo de Garantía

El Estado nacional creará un Fondo de Garantía que se utilizará para garantizar los créditos que reciban determinadas empresas (artículo 6º del texto).

No se especifica de dónde saldrán los recursos para constituir ese fondo, pero por la forma como está plan-

teado lo más probable es que se trate de recursos públicos que serán afectados para ello.

Nuevamente surge la pregunta de qué empresas se beneficiarán con estos fondos de la comunidad y serán aquellas que encuadran en la definición de PYMES del artículo 2º, que ya hemos contado, y que intervengan o participen en los programas "de información y asesoramiento" (artículos 12 y 13), de "polos productivos" (artículo 15), y de "desarrollo de proveedores" (artículo 16) y, tal como surge de la redacción, quedarían excluidas las empresas del sector agropecuario y las cooperativas agropecuarias en una injusta discriminación.

Otras medidas

Encontramos las siguientes:

—El Banco de la Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior instrumentarán líneas de crédito con fondos que obtengan de organismos del exterior.

—Impulsar la creación de empresas privadas calificadoras del riesgo crediticio de las PYMES.

—Facilitar que las PYMES participen en la emisión de obligaciones negociables como una forma de acceder al mercado de capitales.

—Los bancos oficiales pondrán en juego todos los mecanismos a su alcance para potenciar la capacidad del mercado de capitales de concurrir en apoyo de las PYMES con instrumentos financieros genuinos, transparentes y eficaces.

—Utilización durante 1995 de los fondos provenientes de la liquidación de la COPYME para atender los gastos que demande la instrumentación de estas medidas.

—Todas las áreas del sector público deberán aportar toda la información de que dispongan a un sistema de información y asesoramiento para PYMES.

—Movilizar, racionalizar y fortalecer los cursos de acción del INTA, del INTI, del Intemin, y de todos los centros de investigación que dependen del Estado, y cuyas actividades guarden relación con el accionar de las PYMES.

—Consolidar y extender los polos productivos en el interior del país.

—Profundizar, ampliar y difundir el Programa de Desarrollo de Proveedores.

—Encomendar al Poder Ejecutivo para que incentive a las PYMES para que produzcan dentro de altos estándares internacionales de calidad.

—Promover la formación de consorcios de PYMES, especialmente para la exportación.

—Apoyar la internacionalización comercial de las PYMES.

—Diseñar y desarrollar instrumentos que induzcan y faciliten el proceso de especialización de las PYMES, de forma tal de incrementar su competitividad.

—Desarrollo de un programa de capacitación de los cuadros empresariales.

—Arbitrar medios que promuevan la reconversión de las PYMES en consonancia con la preservación del medio ambiente.

—Dictar políticas de lealtad comercial y defensa de la competencia.

—Crear un registro de PYMES por rama de actividad.

—Asignar a las PYMES una cuota mínima de las compras del Estado nacional.

La única medida concreta de todas las detalladas es la que autoriza al Ministerio de Economía a utilizar los fondos que provengan de la liquidación de la COPYME. No se informa a cuánto ascienden esos fondos, en consecuencia si tienen alguna significación o no, y la autorización para su utilización es tan genérica que terminarán siendo utilizados de cualquier forma.

Todas estas medidas mencionadas constituyen un catálogo de buenas intenciones que no excede el planteo teórico. No tendrán una concreción práctica en la medida que no exista un organismo que, contando con la participación de representantes de las PYMES, garantice que todo esto se lleve a cabo.

La instrumentación de estas medidas queda en manos de la autoridad de aplicación, que son los funcionarios del equipo económico. La mayor parte de estas medidas podrían llevarse a cabo sin necesidad de esta ley en la medida que existiera voluntad política en el gobernante para su impulso. No han hecho nada en este sentido y no va a hacer nada por más que este proyecto se apruebe. Porque la mayoría de los objetivos implícitos en estos enunciados no coincide con la ideología de capitalismo salvaje del equipo gobernante. Desde el punto de vista del fundamentalismo que sustentan esta problemática es resuelta por el mercado y la acción estatal sólo tendería a generar ineficiencia productiva. Esta contradicción ideológica entre lo que sustenta el equipo económico y lo que plantea en este proyecto lleva a pensar que no se trata más de un ejercicio teórico cuyo objeto real es justificar la aprobación de las dos o tres cosas que sí les interesa que consten en una ley.

La confección de esta ley es totalmente anticientífica, porque no hay ningún análisis que demuestre que la mala situación de las PYMES esté determinado por el costo laboral. Porque con los mismos costos laborales y otra política arancelaria las fábricas se han mantenido abiertas (caso textil, caso porcelanas).

Sociedades de garantía recíproca

El título II, que consta de 51 artículos, legisla sobre las llamadas Sociedades de Garantía Recíprocas (SGR).

La idea en sí parece correcta, que un grupo de empresas constituyen un fondo común que se utiliza para garantizar los créditos que las mismas empresas toman en el sistema financiero.

Pero es una idea impracticable porque la garantía que puede ofrecer cada empresa por sí misma no se acrecienta por el hecho de reunir un conjunto de empresas en las mismas condiciones.

Existen dos hechos que podrían darle algún sentido a esta idea. Uno de ellos es que las garantías se otorgan a título oneroso. Pero, desarrollada esta idea, caemos en algo que ya existe y que se ofrece en el sis-

tema financiero. Lo que sucede es que tiene un costo que resulta impagable por el sector de pequeñas y medianas empresas.

Llegados aquí estamos nuevamente en el punto de partida, solamente que hemos comprobado que el mercado no tiene solución para este problema.

Pero sí existe un hecho que podría romper el círculo y hacer que esta operatoria tenga sentido, y ese hecho es que el Estado ponga dinero. Y éste es el arbitrio al que recurre el proyecto de ley, pero sin especificar ni cuánto ni cuándo.

En definitiva se trata de la maquinación de un nuevo negocio financiero como fueron la Cédula Hipotecaria Rural y las nuevas normas para la vivienda, pero en definitiva, como ya lo saben los productores agropecuarios y lo experimentarán los futuros propietarios y las PYMES, para ellos se trata de un salvavidas de plomo con el cual no podrán emerger dentro de este plan.

Ahora veamos para quién se prepara este negocio: para el capital financiero. De la mecánica planteada por el proyecto surge claramente que los llamados "socios protectores" (los verdaderos aportantes del dinero) podrán controlar perfectamente a las SGR, a través de su 49 % y una PYME vinculada con su 5 %.

Se trata, en definitiva, de una transferencia de recursos del Estado hacia capitales financieros. En este caso el equipo económico aparece coherente con su ideología y utiliza al Estado para sacarles a quienes menos tienen a través de impuestos indirectos y aportárselos a quienes más tienen a través de subsidios explícitos o implícitos.

Las PYMES son utilizadas como excusa para implementar esta operatoria.

La crisis de las PYMES obedece a la apertura económica indiscriminada que nos obliga a competir con economías hiperdesarrolladas o contra las que aplican dumping social, la pérdida de valor agregado nacional a los productos, el alto costo crediticio, la pérdida de poder adquisitivo del salario que deprime el mercado interno, la alta y regresiva presión fiscal.

Modificaciones de la legislación laboral

La simple sanción de esta ley no asegura la generación de empleo sino que constituye en verdad una nueva ofensiva de una política económica determinada.

Lo que sucede es que todos los parámetros de la realidad económica son inamovibles para el gobierno, nos referimos a las políticas impositiva, crediticia y arancelaria pero se inserta en la opinión pública la idea de que la vigencia del derecho laboral en su actual concepción es lo que impide el surgimiento de nuevos empleos.

Según declaró la Comisión Europea en su Cuarto Informe sobre el empleo en Europa el aumento de la flexibilidad laboral y de la rotación laboral no ofrece una solución al problema del desempleo en Europa.

Desde que comenzó el Plan de Convertibilidad se ha duplicado la tasa de desempleo y la proporción de gente ocupada sobre el total de la población activa es la más baja desde el comienzo del ciclo democrático.

El trabajo es un comportamiento fundamental del ser humano mediante el cual transforma el mundo dado por la naturaleza en un mundo humano.

Una sociedad que no garantiza el pleno empleo a sus ciudadanos no sólo no utiliza convenientemente todo su potencial productivo sino que se convierte en un terreno propicio para la marginalización y la exclusión social.

Las puertas de la justicia social no se abrirán si los empleadores y trabajadores no participan activamente en la elaboración y puesta en práctica de soluciones para el empleo.

Lamentablemente su forma institucional, el Consejo Económico y Social, incorporado en Olivos I se evaporó y no consta en el nuevo texto constitucional.

El progreso tecnológico, la globalización del comercio, la mayor competencia mundial y los altos tipos de interés intensifican el desempleo.

En las economías sujetas al libre juego del mercado, uno de los problemas esenciales contemporáneos es el de la contradicción existente entre el aumento de la productividad y la creación de empleos.

La lucha contra el desempleo debe ser librada en dos frentes: en el contexto internacional mediante una coordinación más eficaz de la política mundial social; problema que ha de signar la Cumbre Mundial sobre desarrollo social que se celebrará en Copenhague; y el nacional, mediante programas adecuados de creación de empleos y políticas basadas en el crecimiento que determinen la concreción de nuevos puestos de trabajo.

Conviene estimular el comercio, asegurar la estabilidad de la moneda y de los tipos de cambio, promover políticas macroeconómicas coordinadas con incentivos financieros adecuados y desarrollar las posibilidades crediticias y de ayuda internacional, pero todo debe estar pensado al servicio del hombre y de su familia y no del porcentaje de utilidad de las grandes concentraciones de capital.

La aparición de un desempleo masivo pesa considerablemente sobre la capacidad de los Estados de financiar y administrar las prestaciones sociales.

La coyuntura económica que atraviesa nuestro país en los últimos años muestra por un lado aparente estabilidad monetaria y por el otro una parte mayoritaria y creciente de la población atravesando niveles ascendentes de desocupación, reducción de condiciones de vida y de trabajo.

La política social y económica que se viene emprendiendo muestra con claridad la intención de solucionar esos problemas mediante un replanteo del rol del Estado en materia social y el regreso a la desregulación.

El principio protectorio del derecho laboral está cuestionado por una contrateoría economicista, de los que siempre se opusieron a la introducción de diversas protecciones laborales, porque perjudicarían a la economía en su conjunto, o al desarrollo económico o al empleo.

Las normas de trabajo no se inspiran ya en el principio protectorio, sino en la intangibilidad del plan económico.

El Estado, en vez de defender la calidad de vida de los trabajadores, pasa a protegerse de ellos y a

proteger a los empresarios garantizando sus inversiones, anteponiendo esta garantía a la tutela de los derechos humanos fundamentales. El costo laboral es uno más sobre los totales que tiene la empresa.

Se produce una estratificación del mercado de trabajo donde coexisten una fuerza de trabajo (minoritaria) que permanece dentro de una estructura relativamente protegida; con una mayoritaria precarizada, caracterizada por la inestabilidad, la incertidumbre, la desprotección y menores ingresos.

El Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social, del cual deriva el proyecto para las PYMES, denotó la ausencia real de los sectores sociales que conformaban la propuesta y consecuentemente, la inviabilidad del planteo elegido, en cuanto pretendía recrear una instancia de inexistente consenso social con traducción legislativa.

No proponía ninguna medida legislativa que modernizara la legislación para incorporar los avances científicos y mejorar el nivel de los trabajadores, a excepción de un compromiso genérico de aumento del empleo.

Los empresarios no asumieron concretos planes de inversión, de mejoras en el medio ambiente y condiciones de empleo, de renovación tecnológica, de mantener puestos de trabajo estables, de incorporar el derecho de información, universalmente aceptado, salvo por Margaret Thatcher y Ronald Reagan.

Sólo se habló de acuerdos regionales para apoyar la generación de empleo, cuando asistimos diariamente al cierre de las fuentes de trabajo por quiebra de las economías regionales, sin precisar cómo se resolverá tan ambiciosa meta, cuando no se resuelve la desindustrialización y pérdida diaria en áreas clave como Rosario.

Según datos de 1993, sobre 460.000 habitantes que conforman la población económicamente activa del Gran Rosario, el 11 % son desempleados y el 12 % subocupados, con menos de 35 horas semanales de trabajo; el 72 % de los desocupados son recientes. El 22 % de estos contingentes, 100.000 personas son jefes de hogar. A su vez, el nivel de desempleo de 1994 —del orden del 15 %— es superior al de 1989 (conforme a Onda, Relevamientos Encuesta Permanente de Hogares, Fundación Banco Municipal, Rosario, "La Nación", Revista "La Nación", 25-9-94).

Respecto del proyecto específico que nos ocupa, la calificación de la pequeña y mediana empresa es muy elástica.

El mecanismo que prevé el artículo 83 en sus últimos dos párrafos es sumamente flexible. Su aplicación va a originar una serie de cuestionamientos y litigios, ya que permitirá que prácticamente por acuerdo de partes se puedan duplicar los requisitos de facturación y del número de trabajadores, dejando esta facultad al arbitrio del Poder Ejecutivo que en materia institucional transgrede todos los moldes.

Podría ocurrir que mediante la negociación colectiva se ampliara a más de 40 trabajadores a una pequeña empresa, y que una definición amplia de la autoridad de aplicación del carácter de PYME se tradujera en que estas disposiciones sobre relaciones del trabajo se extendieran a todos los trabajadores.

Al hablar de una nueva normativa laboral, la legislación adquiere una precisión notable que contrasta con la ambigüedad de los artículos precedentes.

La promoción de los contratos temporarios sin pago de aportes ni indemnización, la posibilidad de incorporar trabajadores por contrato luego de haber despedido personal, permitiendo por ende la sustitución de trabajadores fijos por eventuales, la capacidad de fraccionar vacaciones y aguinaldos, o de extender la jornada en el marco de una supuesta convención colectiva para las PYMES, indican que el proyecto en discusión lejos de intentar beneficiar a dicho sector, pretende servir de disfraz para viabilizar la aprobación de normas laborales que hasta el momento, si bien se aplican, han carecido de consenso para poder ser legalizadas.

El derecho del trabajo se presenta como una serie de normas de carácter imperativo con el carácter de orden público social, y que constituyen un beneficio de los asalariados, un mínimo intocable que la negociación puede mejorar, pero nunca empeorar.

La precisión en la destrucción del derecho laboral y la ambigüedad en la definición de lo que es una pequeña empresa abre la puerta para que este título pueda aplicarse sobre la mayoría de los trabajadores.

Asimismo, la Comisión de Seguimiento que surge de la clasificación del artículo 104, también tiene una estructura muy endeble. Del arbitraje del Ministerio de Trabajo puede depender la existencia de una pequeña o mediana empresa.

Si este proyecto se convierte en ley, las grandes empresas comenzarán a dispersarse en empresas pequeñas y medianas: habrá subcontrataciones, regímenes de franquicias y otros mecanismos similares.

Nosotros estamos dispuestos a tratar toda perfección de la legislación laboral, porque creemos que es perfectible, pero no podemos aceptar que sean estas modificaciones las que vayan a generar empleo en nuestro país, porque ello es falaz y la experiencia internacional así lo demuestra.

Guillermo E. Estévez Boero.